



**Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos**

Distr. general
5 de julio de 2019
Español
Original: inglés

**Documento básico común que forma parte
integrante de los informes de los
Estados partes**

Kiribati*

[Fecha de recepción: 31 de mayo de 2019]

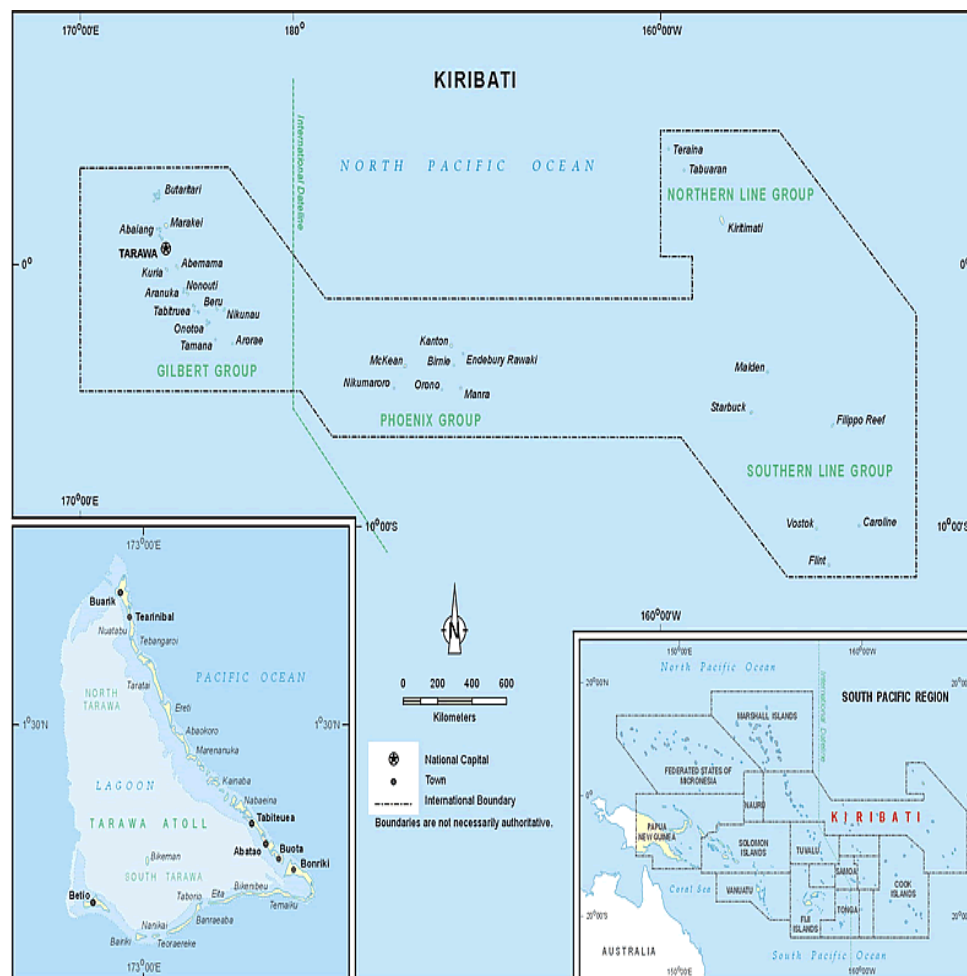
* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.



Lista de abreviaturas y acrónimos

ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
FMI	Fondo Monetario Internacional
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG	organizaciones no gubernamentales
PIB	producto interno bruto
UE	Unión Europea
UNICEF	Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH/sida	Virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Mapa de Kiribati



Capítulo 1

Información general sobre el Estado

A. Demografía

I. Antecedentes históricos

1. Las islas Gilbert tienen una larga historia. Sus pobladores creían que su dios Nareau había creado las islas separando el cielo del mar (*te Bomatemaki*). Según la genealogía de Grimble, los primeros habitantes de las islas llegaron en el año 1000 a.C. Más adelante, en 1400 d.C., arribó un pequeño grupo de samoanos, y fue también la primera vez que se estableció una casa de reuniones comunales tradicional (*maneaba*). Los exploradores españoles fueron los primeros europeos en avistar la isla en 1600, pero fue un acto sin trascendencia. En 1820 las islas recibieron su actual nombre, islas Gilbert, en honor del Capitán británico Thomas Gilbert.

2. En 1892 se produjo la llegada del Capitán Davis en el Buque HMS Royalist de bandera británica, quien estableció el protectorado administrado por Gran Bretaña y puso fin al período de guerras civiles. En 1900 se descubrió fosfato en Banaba (isla Océano), una de las islas Gilbert anexionada por Gran Bretaña. Posteriormente, en 1916, las islas Gilbert y Ellice pasaron a ser colonias británicas.

3. En 1963 se estableció un Consejo Consultivo y en 1967 se eligió la primera Cámara de Representantes. En 1976 las islas Ellice se separaron de las Gilbert y en 1977 se estableció un autogobierno interno. El 12 de julio de 1979 las islas Gilbert obtuvieron su independencia y pasaron a denominarse Kiribati —nombre oficial, República de Kiribati. El primer Presidente electo, o *Beretitenti*, fue el Excmo. Sr. Ieremia Tabai, de la isla de Nonouti, quien hasta la fecha es miembro del Parlamento.

4. En términos de superficie y población, Kiribati es uno de los países más pequeños del mundo, pero en cuanto a su extensión marítima, es uno de los más grandes. La distancia desde la capital Tarawa, en el oeste, hasta Kiritimati en el este, es aproximadamente igual a la que existe entre Los Angeles y Washington, en los Estados Unidos. Con una superficie total de 810 km², las islas de Kiribati representan solo el 0,02 % de la zona marítima del país.

II. Geografía, incluido el clima

5. Kiribati está formado por tres grupos de islas: el grupo de las islas Gilbert y Banaba en el oeste, el Grupo Fénix en el centro y las islas Line septentrionales y meridionales en la parte oriental del país. Kiribati es uno de los Estados insulares más pequeños y estrechos del Pacífico y uno de los más pequeños del mundo.

6. La mayoría de las islas tienen lagunas costeras, algunas de ellas de gran tamaño (de hasta 80 km de longitud), delimitadas al este por estrechas franjas de tierra. No hay colinas ni arroyos en las islas. En el informe de las Naciones Unidas de 1989 sobre el “efecto invernadero”, Kiribati figura entre los países en peligro en caso de elevación del nivel del mar durante el siglo XXI.

7. El clima es tropical y uniforme durante todo el año, con temperaturas que oscilan entre los 72 °F/22 °C y 90 °F/32 °C, diferencias que obedecen al volumen de las precipitaciones. Generalmente, los meses secos son de marzo a octubre, con vientos alisios que soplan en el noroeste. Los meses de noviembre a abril suelen ser los más húmedos, con lluvias torrenciales ocasionales y fuertes vendavales a pesar de que Kiribati se encuentra fuera del cinturón ciclónico. Esas pautas climáticas han variado en los últimos años a causa del cambio climático y es poco usual que los meses de mayor humedad sean los meses que normalmente son secos y más calurosos.

8. La elevación del nivel del mar en Kiribati se produce como desastre natural, sin ciclones ni terremotos. La elevación del nivel del mar hace que Kiribati enfrente una serie de peligros como la erosión de las costas, aguas subterráneas salobres, y suelos pobres para el cultivo, lo que afecta la seguridad alimentaria y la salud. En consecuencia, la elevación del nivel del mar es un problema de gran importancia, que pone en peligro la vida de los habitantes de Kiribati.

9. La tierra es de gran valor e interés para los habitantes del país. Además de ser la base de la subsistencia también reviste importancia social, política y jurídica. En cualquier lugar la tierra es una señal de riqueza, prestigio y seguridad social, pero esa actitud es particularmente marcada en las sociedades de jefes de las islas Gilbert centrales y septentrionales (Aspects of History: 21).

III. Habitantes, idioma, cultura y tradiciones

10. El gran número de matrimonios mixtos a lo largo de los siglos ha hecho que la población sea de apariencia mayoritariamente homogénea.

11. Los habitantes de Kiribati son micronesios de mediana estatura, cabello liso y piel morena. Su idioma es el gilbertés (o *te taetae ni Kiribati*). El inglés, que es el idioma oficial, también se habla corrientemente, sobre todo en la capital, Tarawa.

12. Aunque la mayor parte de la población está constituida por personas indígenas o nativos, hay un número bastante grande de isleños de origen racial mixto proveniente de la época colonial, cuando Kiribati y Tuvalu estaban bajo administración británica. También viven en el país inmigrantes europeos y asiáticos, pero constituyen un número relativamente más pequeño de la población.

Cuadro 1

Grupos étnicos de Kiribati, 2015

Population By Island and Ethnicity: 2015

	Total	I-Kiribati	IKiribati/Tuvalu	IKiribati/European	I-Kiribati/Chinese	Tuvalu	Aust ralia	New Zealand	Fiji	European	Chinese	Other
Total	110,136	105,983	959	556	459	198	39	668	69	93	121	991

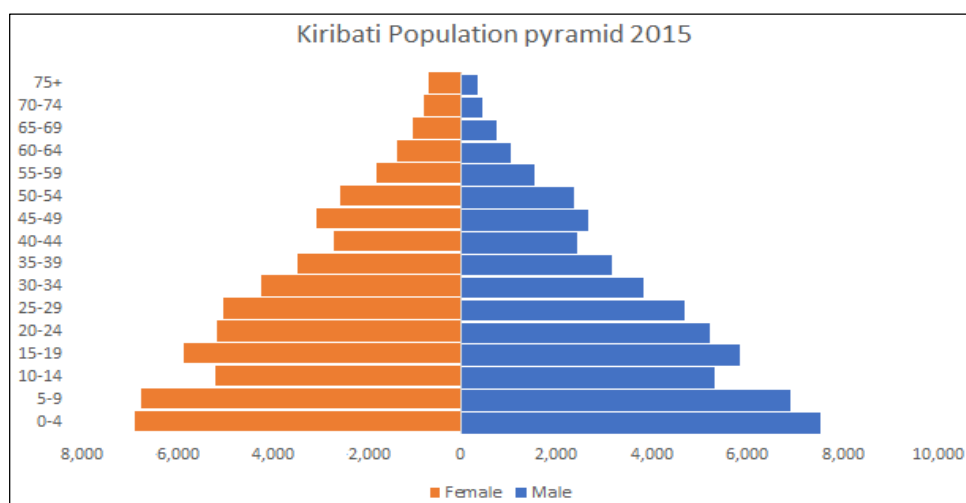
Fuente: Tomado del Censo de Población y Vivienda de Kiribati, 2015.

13. El estilo de vida de los habitantes de Kiribati está muy influenciado por su entorno de islas coralinas de baja altitud dispersas en el Pacífico Central. Kiribati es, por tradición, una sociedad predominantemente patriarcal, con papeles asignados a cada género. Si bien el país tiene unas prácticas, normas y valores culturales homogéneos y compartidos, su cultura es compleja y diversa y cada isla tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, el sistema de jefes es muy común en las islas septentrionales y centrales, mientras que en las demás islas prevalece el sistema *maneaba*. Esa cultura es la base de la identidad de los habitantes y ha dado buenos resultados en Kiribati durante siglos.

IV. Población y vivienda

14. De conformidad con los resultados del censo de 2010, Kiribati tenía una población de 103.058 habitantes, 50.796 hombres y 52.262 mujeres. En 2015, la población total era de 110.136, con 56.040 mujeres y 54.096 hombres.

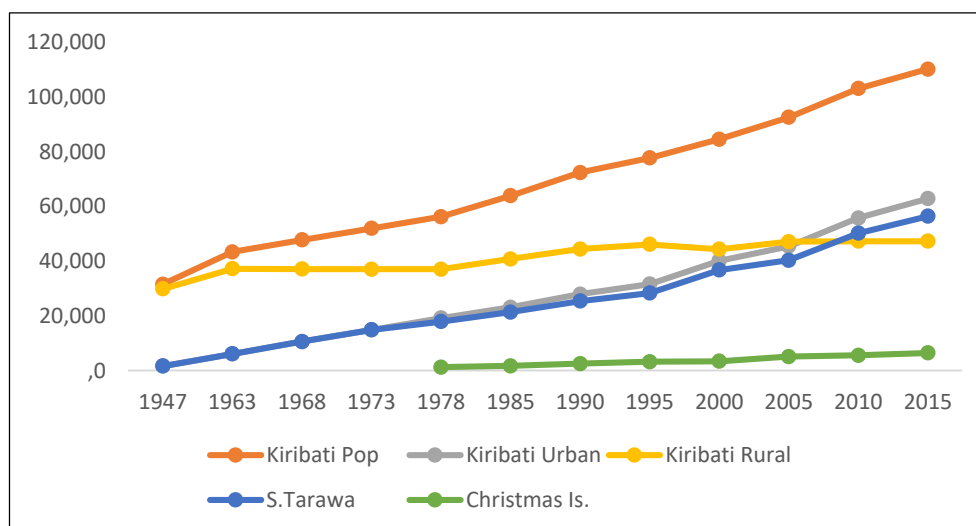
Gráfico 1
Población de Kiribati en 2015



Fuente: Censo de Población y Vivienda de Kiribati, 2015.

15. La mayoría de los kiribatianos vive en aldeas de las islas periféricas, que tienen entre 50 y 3.000 habitantes. La mayor parte de las viviendas se construye con materiales locales como troncos de cocoteros y hojas de pandano. La población se concentra sobre todo en Tarawa Sur, donde más de la mitad de la población reside en viviendas permanentes y semipermanentes. Las viviendas de Kiribati pueden ser del tipo que proporciona la Kiribati Housing Corporation o de las que ofrece la Linnix Housing. Los habitantes de Kiribati pueden vivir en su propia casa o en la de un familiar o amigo. También es posible el alquiler de viviendas. El Gobierno no cuenta con un número suficiente de viviendas para funcionarios públicos, o personas que no sean de la capital (Tarawa), por lo que las alquilan a los funcionarios públicos que trabajan en Tarawa.

Gráfico 2
Tendencias del crecimiento de la población urbana y rural de Kiribati desde 1947



Fuente: Censo de Población y Vivienda, 1947-2015.

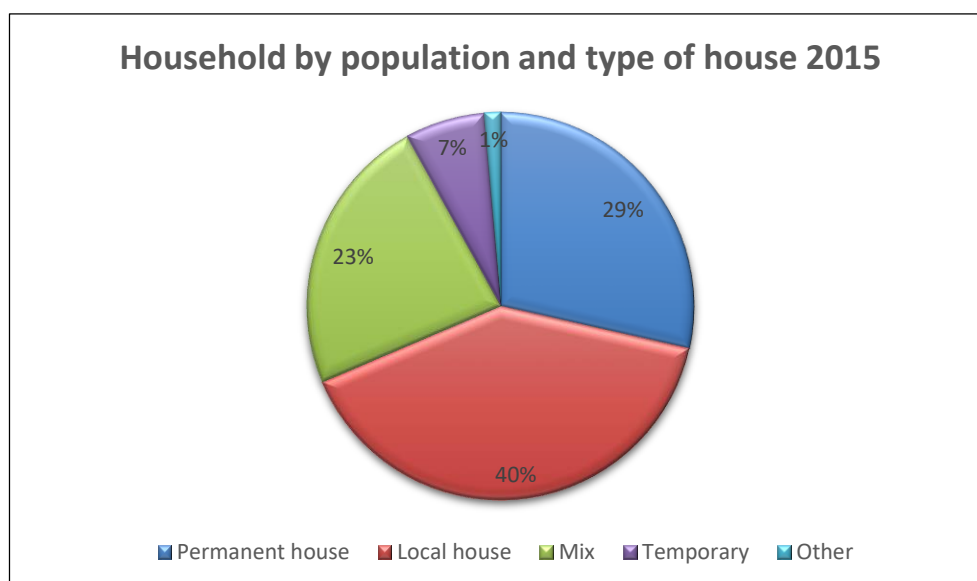
Cuadro 2

Viviendas y propiedad de viviendas en 2010 y 2015

Año	Viviendas del Gobierno, incluidas las de la KHC	De propiedad privada	Alquiladas a propietarios del sector privado	Otras
2010	2 011	12 921	266	845
2015	1 345	14 934	307	1 186

Fuente: Censo de Población de Kiribati, 2010 y 2015.

Gráfico 3

Distribución de viviendas por tipo de construcción, 2015

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Kiribati, 2015.

16. La estructura social tradicional es diversa. Antiguamente, las islas septentrionales y algunas islas centrales estaban gobernadas por jefes o reyes, y los *Te Botaki n Unimwane*, o Consejos de Ancianos, imponían su autoridad en las islas meridionales y algunas islas centrales del grupo Gilbert, sistema que todavía se sigue practicando en muchas islas. Las islas Fénix (a excepción de Kanton, donde el Gobierno tiene una reducida presencia) y las islas Line, en la parte central y oriental de Kiribati, están despobladas. La población de las tres islas Line de la parte septentrional, Kiritimati, Tabuaeran y Teraina, y de Kanton, del grupo Fénix, se ha establecido recientemente, por lo que no cuentan con estructuras sociales tradicionales consolidadas.

17. Kiribati tiene una cultura sólida y vibrante y un patrimonio tradicional basado en la coexistencia comunitaria pacífica, que se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esas normas culturales definen claramente los papeles de los géneros. El jefe de la unidad familiar o *utu* (que generalmente se refiere a la familia extensa que vive junta, o *kainga*) es el varón de mayor edad que participa en las reuniones formales tradicionales y en la adopción de las decisiones tradicionales. Esa práctica continúa hoy en día, especialmente en el grupo de las islas Gilbert meridionales, con ligeros cambios en algunas islas en reconocimiento de la función que desempeñan las organizaciones de mujeres y las familias en las que no hay ancianos que puedan ser representados por la mujer más anciana del *utu*.

V. Religión

18. Los misioneros cristianos dirigidos por el Reverendo Hiram Bingham visitaron por primera vez Abaiang, en el grupo de las islas Gilbert septentrionales, en noviembre de 1857. En 1870 la Sociedad Misionera de Londres patrocinó visitas de miembros del clero de Samoa a Arorae, Tamana, Onotoa y Beru, y en la actualidad las dos islas nombradas en primer término siguen estrictamente los principios de la Sociedad Misionera

de Londres, que prohíben el establecimiento de otras iglesias en las islas. En 1888 llegaron los primeros misioneros católicos romanos a Nonouti, en el grupo de las islas Gilbert meridionales. La población total de Nonouti es de 2.743 habitantes, de los cuales 1.520 son católicos romanos.

19. De conformidad con el censo de 2010, los grupos cristianos representan alrededor del 96 % de la población, siendo la mayoría de ellos católicos o miembros de la Iglesia Unitaria de Kiribati. Las personas sin confesión religiosa constituyen aproximadamente el 0,05 % de la población. Los miembros de la Iglesia Católica se concentran en las islas septentrionales y centrales, mientras que los protestantes constituyen la mayoría en las islas meridionales.

Cuadro 3

Población de Kiribati por religión, 2015

Population by island, sex and religion: 2015

Table 6: Population by island, sex and religion – census 2015															
Total	Total	Roman Catholic	KPC	Seventh Day Adventist	Church Of God	Latter Day Saints	Assembly of God	Bahai	Jehova's Witness (Te Koaua)	Islam	Four Square	Te Ran	All Nation	No religion	Other
Total	110,136	63,116	34,464	2,064	279	5,857	364	2,314	352	139	77	86	141	51	832
Male	54,096	30,963	16,924	996	140	2,843	182	1,163	151	77	38	40	67	32	480
Female	56,040	32,153	17,540	1,068	139	3,014	182	1,151	201	62	39	46	74	19	352

Fuente: Censos de Población de Kiribati, 2010 y 2015.

VI. Fecundidad

20. La planificación familiar, tradicionalmente denominada *Babairean te Utu* (espaciamiento de los nacimientos) se llama ahora *Marurungin te Utu* (programa de salud familiar). El alto crecimiento demográfico sigue siendo un gran reto para el desarrollo. La tasa global de fecundidad aumentó de 2,7 en 2011 a 3,7 en 2016. Entre 2005 y 2010 la tasa de fecundidad de los adolescentes (15 a 19 años), era de 39 por cada 1.000 mujeres, lo que se aproxima a la mediana de la región y pone de manifiesto la baja tasa de uso de anticonceptivos, que es del 36 %, entre las mujeres en edad de procrear. El Ministerio de Salud ha asignado prioridad a la planificación familiar con el objetivo estratégico de mejorar el acceso a unos servicios integrales de alta calidad y potenciar su utilización, en particular entre las poblaciones vulnerables, fundamentalmente las jóvenes y las mujeres, cuya salud y bienestar se verían amenazados en caso de embarazo.

21. En el país se utilizan ocho métodos anticonceptivos: las grageas de Microgynon, los implantes subdérmicos Jadelle, las inyecciones anticonceptivas Depo Provera, los preservativos, la vasectomía, la ligadura de trompas, los dispositivos intrauterinos de cobre y el método Billings.

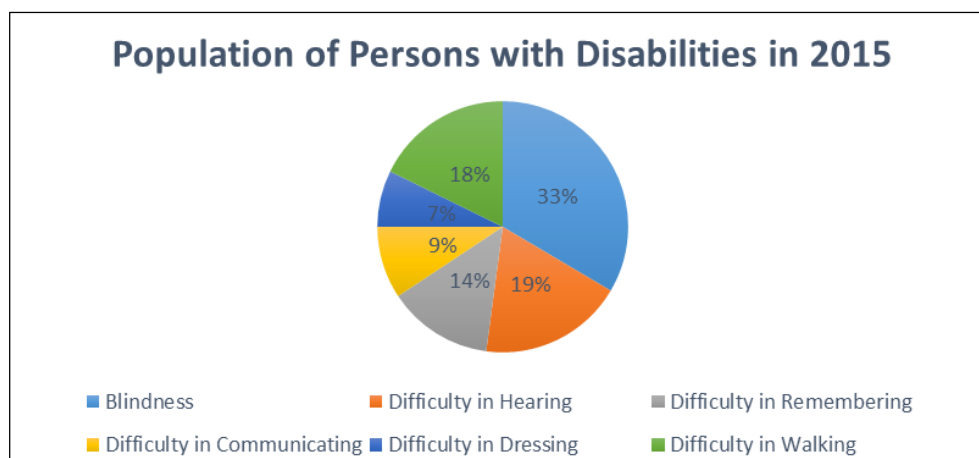
VII. Discapacidad

22. Las personas con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, y por lo general carecen de acceso a servicios básicos como la atención de la salud y tienden a estar excluidos de la educación, las oportunidades económicas y sociales y los espacios políticos, lo que perjudica su capacidad para el disfrute efectivo de su derecho a la supervivencia. Una coalición de grupos interesados en la discapacidad llevó a cabo una encuesta nacional sobre la discapacidad de 2003 a 2005, con el apoyo de "Inclusion International" y financiación del Gobierno de Nueva Zelanda. La encuesta puso de manifiesto la prevalencia de la discapacidad y contribuyó a evaluar el bienestar de las personas con discapacidad en el país. En el censo de 2015, Kiribati incorporó la lista breve de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, que permitió al Estado disponer de datos nacionales sobre la discapacidad (*Kiribati Disability Monograph, 2017*). Sin embargo, seguía siendo necesario realizar mejoras, por lo que el Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico de Kiribati decidió demostrar su apoyo e incluir el conjunto de preguntas sobre la discapacidad en todos los censos. El 25 de septiembre de 2018 el Gobierno de Kiribati puso en marcha la Política Nacional de Discapacidad y Plan de Acción para los años 2018 a 2021, que establece el marco y las estrategias para ayudar a todas las partes interesadas en la aplicación de la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y promover, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

Gráfico 4

Número de personas con discapacidad, 2015



Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2015.

VIII. Economía

23. Debido a la fragilidad del entorno de atolones y la pobreza del suelo poroso (principalmente arena coralina), la agricultura y la ganadería de Kiribati hacen frente a graves limitaciones y problemas en lo que respecta a las variedades de productos que es posible cultivar en las islas. El cocotero, el pandano, el fruto del pan, la calabaza y la papaya crecen en abundancia en las islas. El océano circundante y sus abundantes recursos marinos son una importante fuente de sustento diario de los pobladores.

24. El sector público tiene un papel dominante en la economía, con una participación del 21 %, en tanto que las actividades del sector privado, principalmente la pesca, la agricultura de subsistencia y el comercio minorista, siguen siendo limitadas. Las deficiencias obedecen al aislamiento geográfico, la infraestructura insuficiente, un clima empresarial difícil y un entorno financiero inestable, todo lo cual plantea nuevos obstáculos para el desarrollo. Las limitadas oportunidades de trabajo en el sector privado, aunadas al rápido crecimiento de la fuerza laboral, han dado lugar a una elevada tasa de desempleo, de alrededor del 60 % (Censo de Población y Vivienda, 2015).

25. A pesar de las dificultades, en 2017 un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Kiribati al término de su consulta del artículo IV publicó un mensaje muy positivo.

26. *“Los índices económicos fundamentales de Kiribati se han fortalecido en los últimos años. La solidez de los ingresos provenientes de la pesca mejoró la posición fiscal, fortaleció la cuenta corriente, y estimuló la confianza del sector empresarial. Tras registrar una tasa de dos dígitos en 2015, el crecimiento real del PIB bajó al 1,1 % en 2016, pero se prevé que aumente al 3 % aproximadamente este año impulsado por la construcción y el comercio mayorista y minorista. La inflación ha seguido siendo baja, en consonancia con los precios de los productos importados. Con varios proyectos de infraestructura en trámite, financiados por donantes, y previsiones que indican que los ingresos provenientes de la pesca seguirán siendo sólidos a mediano plazo, las perspectivas económicas son bastante favorables.”* (Comunicado de Prensa del FMI, septiembre de 2017).

27. Se trata de un pronóstico positivo del FMI, que se necesitaba con apremio, respecto de un país que había quedado devastado en vísperas de la independencia en 1979 por el cese de la extracción de fosfatos en Banaba decretado por la Comisión Británica de Fosfatos. En esa época, los ingresos derivados de la extracción de fosfatos en Kiribati representaban el 80 % de las exportaciones y el 50 % de los ingresos públicos. La pérdida

de la industria de los fosfatos ocasionó una enorme caída del PIB, y ningún otro producto o sector pudo compensar la pérdida de ingresos en ese momento.

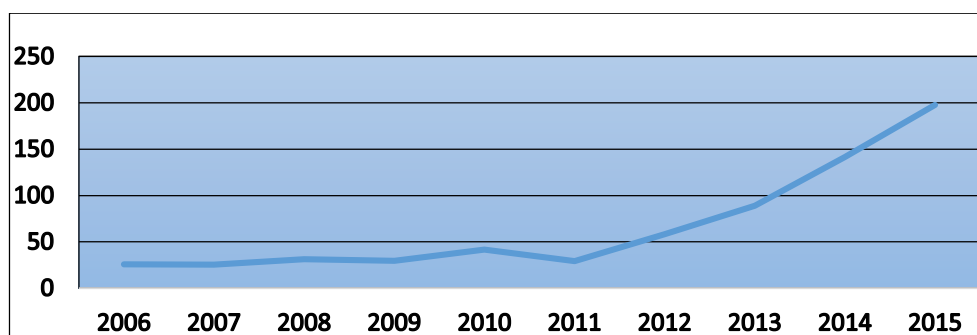
28. La pesca es uno de los sectores en crecimiento para el desarrollo de Kiribati. El sector ha sido la principal fuente de ingresos, junto con otras derivadas de una mejor base de ingresos. Durante los últimos cuatro años se ha registrado un importante aumento de los ingresos provenientes de las licencias de pesca (véase gráfico 6).

29. Los ingresos procedentes de las licencias de pesca aumentaron a 197,8 millones de dólares australianos en 2015, en comparación con 29,5 millones en 2009, lo que representa un aumento del 57,1 %. Para aumentar aún más los ingresos procedentes de la pesca y los ingresos marinos, el Gobierno reconoce la necesidad de añadir valor a los recursos pesqueros locales y la exploración de los minerales de los fondos marinos.

30. Dada la importancia de la pesca para la actividad económica y de subsistencia tradicional de Kiribati, se presta apoyo a las actividades de pesca a pequeña escala por conducto de programas innovadores como el *te Waa n Oo*, que consiste en la distribución entre las comunidades de embarcaciones de fibra de vidrio y motores, herramientas de seguridad para la pesca a precios simbólicos, y buques de línea de tamaño mediano y grande, entre otras cosas. Aunque se han construido fábricas de hielo impulsadas por energía solar en las islas periféricas para apoyar la comercialización de las actividades pesqueras, esas instalaciones siguen haciendo frente a problemas de gestión y mantenimiento.

Gráfico 5

**Tendencias totales de los ingresos procedentes de licencias de pesca
(en millones de dólares australianos), 2006-2015**



Fuente: Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico.

31. Las únicas posibilidades reales de diversificación de la economía en el futuro radican en la enorme zona económica exclusiva de Kiribati y en sus considerables recursos marinos. La zona económica exclusiva del país, de alrededor de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, es una de las más grandes del mundo en relación con la superficie de Kiribati. Las flotas pesqueras de China, Corea del Sur, los Estados Unidos, el Japón, Taiwán y la Unión Europea pagan derechos de licencia para operar en las aguas territoriales de Kiribati. Esas licencias arrojaron ingresos por valor de 20 a 35 millones de dólares de los Estados Unidos anuales en los primeros años del decenio de 2000. Las cifras se han cuadruplicado desde 2013 tras la introducción al nivel regional del Plan de Limitación de Días de Pesca por las Partes en el Acuerdo de Nauru, entre las que figura Kiribati (Informe Anual del Fondo Monetario Internacional, 2016).

32. Sin embargo, la zona económica exclusiva de Kiribati es enorme y muy difícil de vigilar a causa de la pequeña superficie terrestre y los limitados recursos. Kiribati tiene una sola lancha patrullera para su vasta zona marítima y sufre pérdidas de millones de dólares todos los años a causa de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en su zona económica exclusiva. La pesca en aguas de Kiribati depende de las condiciones climáticas, lo que pone de manifiesto la volatilidad de los ingresos procedentes de los derechos de licencia.

33. Después de las licencias de pesca, la fuente de ingresos más importante la constituyen las remesas de los marineros al servicio de buques mercantes, principalmente

alemanes, y de los participantes en los nuevos planes de empleo de Nueva Zelanda y Australia. Las remesas de los trabajadores de Kiribati en el extranjero representan más de 11 millones de dólares australianos anuales. Históricamente, los habitantes de Kiribati han sido notables marineros, y actualmente alrededor de 1.400 ciudadanos de Kiribati han recibido formación, poseen los respectivos certificados y trabajan fuera del país en la marina mercante y en flotas pesqueras extranjeras. Las remesas de los marineros son una importante fuente de ingresos para las familias del país, y se registra una inscripción anual constante de jóvenes kiribatianos en el Centro de Capacitación Marina de Kiribati y en el Centro de Capacitación Pesquera. Una fuente vital de ingresos en Kiribati proviene de su fondo soberano nacional, el Fondo de Reserva para la Nivelación de Ingresos. Gracias a una gestión prudente, el Fondo ha mantenido un crecimiento estable a través de los años, y en 2017 su cuantía era de 897 millones de dólares australianos (Visión de Kiribati para los Próximos 20 Años, KV20).

34. Una tercera fuente de ingresos es la asistencia exterior para el desarrollo, que oscila entre los 30 y 40 millones de dólares de los Estados Unidos anuales. Los donantes más importantes son el Japón, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán.

35. El turismo es un sector nacional relativamente pequeño, pero importante; entre sus atracciones se incluyen sitios de batallas de la Segunda Guerra Mundial, la pesca deportiva y el ecoturismo. La mayoría de los turistas estadounidenses solo visitan la isla Christmas y las islas Line en viajes de vacaciones de pesca y submarinismo.

36. El principal producto de exportación es la copra —pulpa seca del coco—, que representa alrededor de dos tercios de los ingresos por exportación; otros productos de exportación son los peces mascota y las algas marinas. Los principales socios comerciales de Kiribati son Australia, Nueva Zelanda y el Japón.

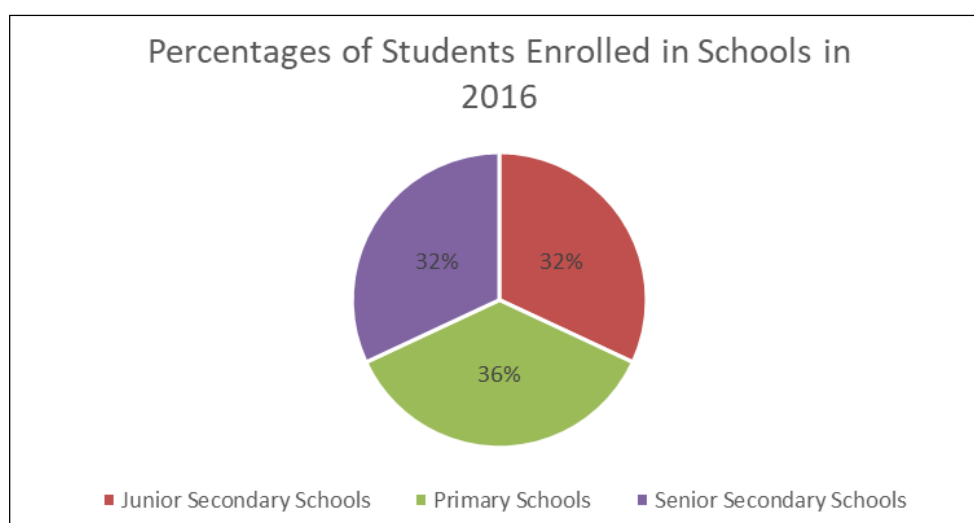
37. Las numerosas pequeñas islas de Kiribati hacen que el transporte y las comunicaciones sean costosos y difíciles. Su ubicación en medio del Océano Pacífico lo alejan de los principales mercados y rutas de transporte mundiales.

38. A pesar de los problemas del transporte y las comunicaciones, se registran considerables mejoras en Kiribati gracias a la reciente introducción de nuevos servicios aéreos conjuntos de la aerolínea nacional, Air Kiribati, y las Solomon Airlines. Otras líneas aéreas que operan en Kiribati son Air Pacific, Our Airline y Air Marshall Islands, con vuelos internacionales a la capital, Tarawa. Air Kiribati llega a todos los atolones de las islas Gilbert utilizando aviones pequeños que despegan de Tarawa. Buques pequeños prestan servicio a las islas periféricas, incluidas las islas Line, con horarios irregulares. En el marco de un acuerdo de operación conjunta de Air Pacific y el Gobierno de Kiribati, Air Pacific tiene un vuelo que une Tarawa a la isla Christmas y Honolulu, pasando por Nadi (Fiji). Cabe esperar que la introducción de otros servicios dé lugar a la competencia y, como resultado de ello, a la reducción del costo de los viajes por vía aérea, ya que actualmente el viaje por avión de Tarawa a Nadi es probablemente el más caro por kilómetro de recorrido en todo el mundo (informe de la Misión de Kiribati ante las Naciones Unidas en Nueva York, 2016).

IX. Educación

39. El Gobierno de Kiribati asegura la educación primaria y secundaria de primer ciclo obligatoria y gratuita para todos sus ciudadanos. En 2016 el número de estudiantes en las escuelas primarias, secundarias de primer ciclo y secundarias superiores era de 28.565, con un 52 % de niñas y un 48 % de niños. En el gráfico que figura a continuación se indican los porcentajes de estudiantes matriculados en los distintos tipos de escuelas. En el otro gráfico se indica el coeficiente maestro/estudiante, que en las escuelas primarias era de 1 maestro para 26 estudiantes, en las escuelas secundarias de primer ciclo era de 1 maestro para 16 estudiantes y en las escuelas secundarias superiores era también de 1 maestro para 16 estudiantes.

Gráfico 6

Matriculación de estudiantes en las escuelas, 2016

Fuente: Ministerio de Educación.

40. En Kiribati hay 137 escuelas, de las cuales 95 son escuelas primarias, 24 son escuelas secundarias de primer ciclo y 18 son escuelas secundarias superiores.

41. El Gobierno de Kiribati promulgó la Ley de Educación en 2013, que contiene una disposición relativa a la edad de la enseñanza obligatoria para todos los niños de Kiribati, que comprende de los 6 a los 15 años. La Ley contiene también un artículo que prohíbe el castigo corporal en las escuelas, y dispone que las niñas embarazadas pueden continuar sus estudios. La Política de Educación Inclusiva se elaboró en 2013 con el propósito de incluir a los estudiantes con discapacidad en el sistema de educación ordinario. Se observaron deficiencias a la hora de su aplicación, por lo que la Escuela de Formación Docente de Kiribati estableció el Comité de Educación Inclusiva, que presta asistencia a los maestros que carecen de conocimientos o experiencia en relación con estudiantes con discapacidad. Durante decenios el presupuesto anual del Ministerio de Educación ha absorbido la mayor parte del presupuesto nacional, lo que pone de relieve el compromiso del Gobierno con el derecho a una educación de calidad. En el presupuesto revisado de 2018 se asignó a esos fines la suma de 41.954.129 dólares australianos, mientras que para 2019 la asignación es de 42.490.370 dólares.

X. Salud

42. Los servicios de salud son gratuitos para todos los ciudadanos y los extranjeros que trabajan en Kiribati. El Ministerio de Salud y Servicios Médicos gestiona los servicios generales, de salud pública y de enfermería de los cuatro hospitales principales: dos de ellos están en Tarawa Sur, otro en las islas periféricas de Tabiteuea Septentrional, que atiende al Distrito Sur y otro en Kiritimati, que atiende a las islas Line y Fénix. La Junta de Derivaciones Médicas puede recomendar el tratamiento en el extranjero de los pacientes con necesidades de asistencia especializada que el Hospital Central de Tungaru no pueda atender.

43. Es probable que aumente la incidencia de las enfermedades no transmisibles, ya que el número de personas con más de tres factores de riesgo pasó del 79 % en 2006 al 83,6 % en 2015, lo que puede dar lugar a una reversión de la tendencia al aumento de la esperanza de vida, que en las mujeres pasó de 64 años en 1990 a 70 en 2010. Los datos del cuadro 18 reflejan el aumento en el número y tipo de las enfermedades no transmisibles entre 2010 y 2015, atribuible a los efectos del desarrollo económico y la modernización, que han acarreado una mayor dependencia de los alimentos procesados importados, en particular el arroz, los fideos y los alimentos enlatados. La creciente sobrepoblación ha reducido la superficie cultivable en Tarawa Sur. En términos generales, la horticultura entraña un enorme trabajo, ya que el suelo del atolón es muy pobre y requiere muchos

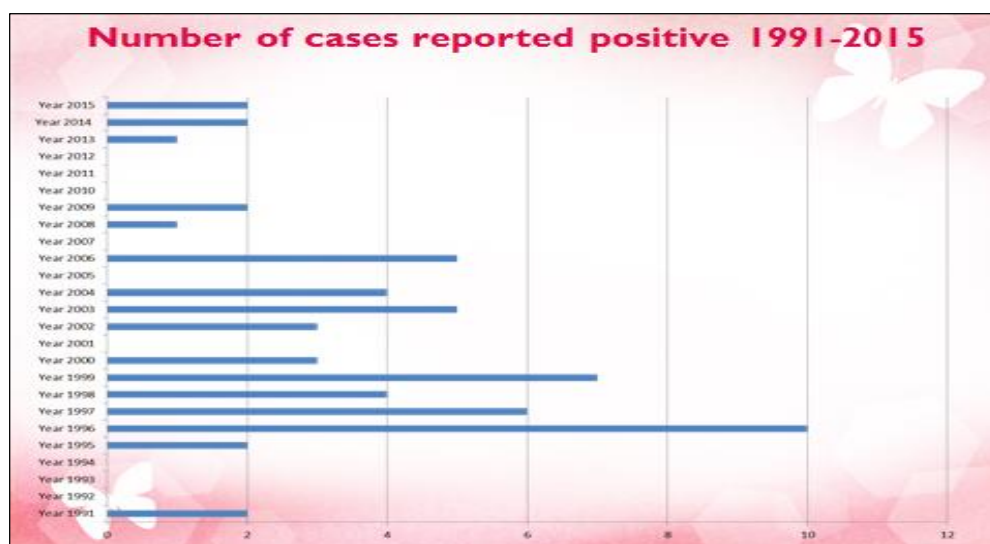
suplementos. En el Plan Estratégico del Ministerio de Salud y Servicios Médicos se presta especial atención al fortalecimiento de iniciativas destinadas a reducir la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. En un estudio de 2015 sobre factores de riesgo de esas enfermedades realizado con la metodología STEPS se observó que:

- El 28,1 % de la población era diabética.
- El 81,5 % de la población tenía sobrepeso.
- El 99 % de la población consumía menos de cinco frutas y verduras en su dieta diaria.
- El 59 % de la población fumaba.
- El 71,8 % de los hombres y el 49,2 % de las mujeres bebían alcohol.

44. El primer paciente seropositivo fue diagnosticado en 1991. Desde entonces, la cifra ha aumentado y el mayor número de portadores del VIH se registra entre los kiribatianos que trabajan como marineros mercantes. Entre 1991 y 2017 se registraron 61 casos de VIH entre 35 hombres y 26 mujeres. En 2009 Kiribati confirmó 53 casos de VIH/sida, de los cuales 12 (6 %) correspondían a jóvenes. Las cifras parecen estar disminuyendo gracias a los buenos resultados de los programas de concienciación, que hacen que aumente el uso de medidas de protección. El gráfico que figura a continuación ofrece información sobre el número de casos de VIH en Kiribati durante el período 1991-2015.

Gráfico 8

Número de casos de VIH/sida notificados, 1991-2015



Fuente: Foro Nacional de Salud, presentación sobre el VIH, 2015.

45. La salud materna en Kiribati está mejorando. En 2005, la tasa de cobertura de la atención prenatal (proporción de mujeres embarazadas que tuvieron al menos una visita) fue del 100 %. En 2010 el 98 % de los partos fue atendido por personal sanitario cualificado del Centro de Salud Prenatal.

46. Las causas comunes de la mortalidad y morbilidad infantiles son las afecciones perinatales, las enfermedades diarreicas y la neumonía, además de la malnutrición, la carencia de hierro y vitamina A y la infestación verminosa entre los niños, que van en aumento. La tasa de mortalidad infantil ha mejorado, ya que la cifra estimada del censo de 2005 es de 52 por cada 1.000 nacidos vivos frente a 67 por cada 1.000 en 1995. Aunque la tasa global de fecundidad es alta, un análisis comparativo indica que Kiribati tiene la mayor tasa de mortalidad infantil de niños menores de 5 años de todos los países insulares del Pacífico. Por ello, el Gobierno se ha fijado el objetivo de reducir la tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) del 59,1 % al 49,1 % a más tardar en 2019. Los índices de mortalidad infantil y neonatal tienden a ser más altos en las islas periféricas que presentan menores tasas de mortalidad en el período postneonatal. Se

considera que la diferencia en las tasas de mortalidad neonatal entre el medio urbano y el rural se debe a la accesibilidad de los servicios médicos y a que en las zonas urbanas hay más hogares de los quintiles de mayor riqueza.

Cuadro 4

Tasas estimadas de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años, Kiribati, 1991-2011

	1990	2000	2011	Decrease 1990-2011	2015 Target
U5MR	88	65 69	47 59 (75)	47%	29
IMR (<1-5 years)	64	NA 52	38 45 (43)	41%	21
CMR (1-5 year)	24	NA 17.5	9 14 (32)	63%	
IMR as Propotion of U5mr	72%	NA	81%	NA	NA

47. La Política Nacional de Salud Mental de Kiribati, 2016-2020, tiene por objeto mejorar la calidad de los servicios de salud mental y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. El Ministerio de Salud recibe la segunda asignación de mayor cuantía del presupuesto anual del Gobierno.

48. El Ministerio de Salud realiza numerosas actividades de promoción relativas al cuidado infantil y el derecho a la salud y la atención médica. En función de los diversos programas de servicios de salud pública y promoción de la salud que lleva a cabo, la partida presupuestaria asignada al Ministerio en 2019 fue de 29.060.313 dólares australianos, en comparación con la consignada en el presupuesto revisado de 2018, que fue de 29.363.847 dólares.

XI. Sector de la seguridad

49. Kiribati no tiene fuerzas armadas. Por ello, el Servicio de Policía de Kiribati se ocupa de la seguridad de todo el país. El Servicio de Policía depende de la Oficina del *Beretitenti* y tiene el mandato de hacer cumplir las leyes, prevenir la delincuencia, responder a situaciones de emergencia y prestar servicios de apoyo toda vez que el público lo requiera. Su misión consiste en trabajar con la comunidad para promover la paz, la seguridad pública, y reducir la delincuencia y la violencia. Anteriormente se denominaba Fuerza de Policía de Kiribati. La intención general de esa modificación es recordar que los agentes de policía son funcionarios públicos, no servidores públicos —que a menudo utilizan la fuerza para hacer cumplir las leyes. Se recuerda siempre a los agentes de policía que la función de servicio exige profesionalismo a la hora de atender a las necesidades del público.

50. El Servicio de Policía imparte formación continua, en colaboración con la Iniciativa de Policía del Pacífico y la Iniciativa de Policía Regional del Pacífico y el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Comunidad del Pacífico, sobre la violencia doméstica, el manejo de la violencia doméstica, los derechos humanos, las cuestiones de género, y otros temas.

B. Estructura constitucional, política y jurídica del Estado

I. Constitución

51. El 12 de julio de 1979 Kiribati proclamó su independencia como República Independiente en virtud de la Ley de Kiribati de 1979. El siguiente paso fue la orden de dar efecto a la Constitución ese mismo día. Así pues, la Constitución es la ley suprema del país y proporciona el marco de orientación para el Gobierno. Establece la división de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. También contiene disposiciones relativas a la

ciudadanía, el estatuto especial de Banaba y los banabanos, y los derechos y libertades fundamentales de la persona.

52. La Constitución garantiza los derechos y las libertades de la persona, como los relativos a la vida y la libertad, la libertad de conciencia, expresión, asociación y circulación y la protección de la ley. En lo que se refiere a la libertad frente a la discriminación destaca notablemente, y así lo reconoce el Gobierno, la ausencia de una disposición que proteja contra la discriminación por motivos de sexo o género.

53. En caso de disolución del órgano legislativo por moción de censura, la Constitución estipula la creación de un Consejo de Estado provisional, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente del Parlamento y el Presidente de la Comisión de la Administración Pública.

II. Jefe de Estado

54. Kiribati tiene un sistema de gobierno democrático parlamentario, con un Parlamento unicameral. El poder ejecutivo se compone del *Beretitenti*, el Vicepresidente y el Gabinete. El *Beretitenti* es el Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, así como Jefe del Gabinete. De conformidad con la Constitución, el desempeño del cargo de *Beretitenti*, que es nominado entre los legisladores electos, está limitado a tres períodos de cuatro años. El Parlamento (*Maneaba Ni Maungatabu*) tiene 45 escaños; 44 son elegidos por votación popular y 1 es designado para representar a las comunidades banabanas en la isla Rabi; los miembros sirven por períodos de cuatro años.

III. Sistema de jefes

55. El sistema de jefes era común en las islas Gilbert centrales y septentrionales, en tanto que en las islas Gilbert meridionales se utilizaba el sistema *Unimwane* (*mwaneaba*). En el sistema de jefes, una sola persona ostentaba todas las facultades y privilegios con respecto a sus súbditos y sus recursos. En la época anterior a la colonia, las islas del grupo Gilbert centrales y septentrionales eran gobernadas por las familias del *Uea* (grandes jefes/reyes). Las islas meridionales, desde Nonouti hasta Arorae, eran gobernadas por Consejos del *Unimwane* que se reunían en la *mwaneaba* para analizar y resolver todo tipo de problemas sociales, económicos y políticos. En ese sistema, el *Unimwane*, integrado por los jefes de cada *kainga* (familia extensa), era el órgano de mayor autoridad y el único que adoptaba las decisiones en la comunidad. Se consideraba que las decisiones del *Unimwane* eran las mejores ya que eran el fruto de detenidas deliberaciones entre los miembros más ancianos, sabios y experimentados de la comunidad.

56. El sistema de jefes de las islas Gilbert centrales y septentrionales desapareció gradualmente debido a que era incompatible con la nueva forma de gobierno democrático y las creencias cristianas que se introdujeron en el país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por otro lado, se alentó la continuación del sistema *Unimwane* por su similitud con el modelo democrático occidental, y sigue siendo la forma de autoridad tradicional dominante en todo el país.

IV. Sistema de gobierno

57. Kiribati respalda firmemente el estado de derecho y la administración de justicia para quienes solicitan amparo legal. Como ya se ha mencionado, la Constitución, en particular el capítulo II, garantiza la protección de las personas y la igualdad de todos ante la ley. Esa protección incluye el derecho de toda persona acusada de un delito a ser oída imparcialmente, dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial establecido de acuerdo con la ley. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. La persona también debe ser informada en un idioma que entienda correctamente, y se le deberá dar tiempo suficiente para defenderse.

58. El poder judicial es la rama del Gobierno que interpreta y aplica las leyes del país. Además de la Constitución, la legislación de Kiribati reconoce el derecho consuetudinario no escrito, que los tribunales deben tener en cuenta al examinar cuestiones específicas en actuaciones penales y civiles.

V. Gobierno local

59. La Ley de Gobierno Local de 1984 (enmendada en 2006) establece las funciones de los gobiernos locales y está consagrada en la Constitución. Incumbe al Ministro del Interior la función de supervisión ministerial de los gobiernos locales, que comprenden 23 Consejos de las Islas y tres Consejos Municipales. Las elecciones locales se celebran cada cuatro años.

60. El liderazgo tradicional en las islas periféricas está a cargo del *Botaki n Unimwane* (Consejo de Ancianos), que examina en un entorno tradicional cuestiones relativas a sus islas. Un segundo nivel de liderazgo es el Consejo de Islas —una prolongación de la rama del Gobierno en las islas, cuyos miembros se eligen cada cuatro años, presidida por un alcalde, también elegido por el pueblo de la isla de que se trate.

61. Los Consejos tienen facultad para formular estatutos, fijar el presupuesto y determinar las prioridades de desarrollo de su isla. Básicamente, representan la autoridad legal que gobierna la isla. Debido a esa estructura de liderazgo de dos niveles, una tradicional y otra más moderna, no es inusual que se produzcan divergencias de opinión y enfrentamientos entre las instituciones modernas y las tradicionales, lo que requiere la mediación del Gobierno central.

VI. Tribunales

62. Kiribati tiene tres tipos de tribunales: Tribunal de Apelación, Tribunal Superior y tribunales de primera instancia. Todos los jueces y magistrados son nombrados por el *Beretitenti*. El proceso de nombramiento, especialmente de los miembros de los tribunales superiores, varía en función del artículo 90 de la Constitución, asigna al *Beretitenti* la función de nombramiento de los jueces del Tribunal de Apelación, con el asesoramiento del Presidente del Tribunal Supremo y la Comisión de Administración Pública. El Tribunal Superior es un Tribunal de registro superior integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y varios otros jueces, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Constitución. Los tribunales de primera instancia (competencias limitadas) se ocupan de la mayoría de los asuntos civiles y penales, aunque los delitos más graves y las demandas civiles son competencia del Tribunal Superior.

63. La Constitución establece el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior y concede facultades a este último para supervisar a los tribunales inferiores, es decir, a los tribunales de primera instancia creados por la Ordenanza de tribunales de primera instancia. El Tribunal Superior tiene competencia jurisdiccional plena, incluso para interpretar y determinar cuestiones relativas a la Constitución, mientras que, de conformidad con la Ordenanza de tribunales de primera instancia, la competencia jurisdiccional de los tribunales inferiores es limitada. El sistema judicial se basa en el derecho anglosajón.

64. También hay ejemplos de leyes nacionales que tratan una serie más amplia de derechos humanos relacionados con el respeto de las garantías procesales. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal se establecen diversas salvaguardias frente a la detención arbitraria y el allanamiento de morada. Toda violación de los derechos humanos contemplados en la ley puede ser sometida a los tribunales.

65. El Consejo Privado tiene competencia exclusiva para entender sobre las apelaciones contra cualquier fallo del Tribunal Superior que se refiera a la interpretación de la Constitución en los casos en que el recurso ante dicho Tribunal se haya interpuesto sobre la base de la violación de los derechos de la comunidad banabana o del Consejo de Rabi en virtud de los capítulos III o IX de la Constitución (información del sistema de tribunales de Kiribati, PacLII).

VII. Sistema electoral

66. La Constitución exige que una Comisión Electoral revise la composición del *Maneaba ni Maungatabu* a intervalos no mayores de cuatro años. La Comisión formula recomendaciones al Parlamento con respecto al número de distritos electorales, las fronteras y el número de miembros elegidos en cada distrito. El Parlamento puede aceptar o rechazar las recomendaciones según estime conveniente. El número de representantes por

distrito se determina mediante una fórmula recomendada por la Comisión Electoral y aprobada por el Parlamento.

67. Sobre la base de una recomendación de la Comisión Electoral formulada en 2007, y aprobada por el Parlamento, se recomendó el aumento del número de sus miembros a dos para las islas con una población de entre 1.500 y 5.000 habitantes. En las islas con población de 1.500 habitantes o menos, se mantendría 1 solo representante, mientras que en las islas con más de 5.000 podrían elegirse 3 candidatos. Debido al crecimiento de la población, el número de representantes elegidos aumentó de 36 antes de las elecciones de 1982, a 39 en 1987, 40 en 1990, 41 en 2003 y 44 en 2007 hasta la fecha.

68. De conformidad con la Constitución y la Ordenanza sobre las Elecciones de 1977, para ser miembro del *Maneaba ni Maungatabu* es necesario ser elector cualificado, haber cumplido 21 años de edad y no ocupar ningún cargo cuyas funciones impliquen la celebración de elecciones o la compilación o revisión de cualquier registro electoral individual. El candidato no debe ser funcionario público ni profesar lealtad a un Estado o potencia extranjero.

69. Además, a excepción de las personas declaradas dementes o que estén cumpliendo una condena de prisión de 12 meses o más, todos los ciudadanos de Kiribati que hayan cumplido 18 años de edad y hayan residido en un distrito electoral durante un período ininterrumpido de 12 meses tienen derecho a ser inscritos como electores o votantes en las elecciones.

70. En virtud del artículo 62 de la Constitución, la responsabilidad general por la supervisión de las elecciones en Kiribati recae en una Comisión Electoral integrada por un Comisionado Electoral Jefe y no menos de dos ni más de cuatro Comisionados nombrados por el *Beretitenti* previa consulta con el Gabinete. El Presidente del Tribunal Supremo participa en la supervisión de la elección del *Beretitenti*. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución y el artículo 4 de la Ordenanza sobre las Elecciones, la aplicación de las disposiciones administrativas y la celebración de las elecciones corresponden al Oficial Electoral Jefe, quien nombra a los oficiales electorales y auxiliares de oficiales electorales en cada distrito electoral. Esos oficiales prestan asistencia en la inscripción de los votantes y la celebración de las elecciones.

71. Con los recientes cambios en las carteras ministeriales, la supervisión ministerial de las elecciones se ha transferido del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia.

Capítulo 2

Marco jurídico general de la promoción y protección de los derechos humanos

C. Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

72. Kiribati se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas en 1999 durante la administración del Excmo. Sr. Teburoro Tito. Sin embargo, antes de ingresar a las Naciones Unidas, Kiribati ratificó una convención internacional de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño (11 de diciembre de 1995).

73. Kiribati solo ha ratificado tres de las convenciones internacionales de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el 17 de marzo de 2004, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), el 27 de septiembre de 2013. Esas Convenciones aún no se han incorporado plenamente en la legislación de Kiribati. La plena aplicación sigue avanzando lentamente a causa de demoras que obedecen principalmente a limitaciones en materia de recursos y capacidad, entre otros factores. Sin embargo, se han realizado esfuerzos en algunas esferas para armonizar las leyes nacionales con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recientemente el

Gobierno ratificó los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, el 16 de septiembre de 2015. Se enumeran a continuación las tres convenciones internacionales de derecho humanos ratificadas y las medidas adoptadas por Kiribati para dar cumplimiento a sus obligaciones como parte en dichos instrumentos:

- a) Política de Lactancia Materna;
- b) Política Nacional de Juventud;
- c) Ley de Bienestar de la Infancia, la Juventud y la Familia;
- d) Política Nacional para la Eliminación de la Violencia Sexual y de Género;
- e) Política de Educación Inclusiva;
- f) Ley de Justicia Juvenil;
- g) Política de Igualdad de Género y Adelanto de la Mujer;
- h) *Ley Te Rau n te Mwenga* (Ley sobre la Paz Familiar);
- i) Política de Educación Inclusiva;
- j) Política Nacional sobre la Discapacidad de Kiribati;
- k) Política Nacional de Salud Mental de Kiribati;
- l) Política Ambiental Integrada de Kiribati.

D. Marco jurídico para la protección de los derechos humanos a nivel nacional

74. La Carta de Derechos de la Constitución de Kiribati figura en el capítulo II. La Constitución reconoce los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin distinción de raza, origen, opinión política, color, credo o sexo, tales como la protección del derecho a la vida y a la libertad, la protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra el trato inhumano, la protección contra la privación de bienes, la protección de la privacidad del hogar y otros bienes, la protección de la libertad de conciencia, expresión, asociación y circulación, y la protección contra la discriminación por motivos de raza.

75. Se ha llevado a cabo con buenos resultados un proyecto de reforma legislativa de la protección de la infancia en colaboración con el UNICEF, en cuyo contexto se aprobaron y promulgaron la Ley de Bienestar de la Infancia, la Juventud y la Familia en 2013 y la Ley de Justicia Juvenil en 2015.

76. De conformidad con la Ley de Bienestar de la Infancia, la Juventud y la Familia, por niño se entiende todos los niños de 0 a 18 años de edad, y por joven se entiende las personas de edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Los objetivos de la Ley son el fortalecimiento de las familias y la promoción de su bienestar, el apoyo a las funciones que desempeñan los progenitores, las familias y las comunidades en la salvaguardia de las responsabilidades, el fortalecimiento de las prácticas tradicionales positivas, la promoción de las actitudes y respuestas de cuidado y la adopción de medidas en relación con la prestación de cuidados y protección parentales.

77. En dicha Ley se esbozan los principios del cuidado y la protección de los niños, la orientación y el apoyo para que el niño crezca en un entorno enriquecedor, seguro y estable. El niño debe crecer respetando su cultura y tradiciones con sentido de responsabilidad, en un medio libre de discriminación, violencia, abusos, descuido y explotación. La Ley reconoce a los padres como los principales cuidadores y cualquier decisión o acción para el bienestar del niño o el joven debe adoptarse en función del principio de que todo niño merece ser cuidado y protegido por su familia. Por lo tanto, se fomenta la participación de la familia y la comunidad, cuando es necesario.

78. La intervención o las decisiones de los tribunales deben ser apropiadas a la edad, el carácter, la condición, la discapacidad o las circunstancias especiales del niño, y reafirmar que los derechos del niño en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño deben ser respetados y promovidos en función de su interés superior.

79. Además, en la Ley de Menores de 2015, por niño se entiende los niños menores de 14 años y por joven se entiende las personas de 14 años pero menores de 18 años. Esta Ley prevé el establecimiento de un Tribunal de Menores especializado en casos de jóvenes infractores, y de un lugar de detención para niños (técnicamente, no una cárcel o prisión), según lo establecido por el Ministro. La Ley establece las formas en que el Tribunal debe ayudar al niño, incluidos el uso de un lenguaje comprensible o básico en relación con acusaciones ante el Tribunal, la posibilidad de que se escuchen las opiniones del niño, la participación de un Oficial para los Niños que informará sobre sus antecedentes e historia, y la presencia de los progenitores, familiares o tutores del niño en el tribunal antes de la acusación o la audiencia.

80. En lo que respecta a las sanciones, se podrá imponer a los progenitores el pago de una multa por daños y perjuicios y costos incurridos, o exigirles que ofrezcan seguridades en cuanto a la buena conducta del joven infractor en el futuro. La Ley estipula claramente que ningún niño podrá ingresar en prisión. Los jóvenes podrán ingresar en prisión si es la única solución según sus circunstancias, pero no en la prisión o cárcel del Estado, sino únicamente en los lugares de detención apropiados designados por el Ministro. La Ley establece, además, que el encarcelamiento de un niño o joven se considerará como una “custodia” del niño, no en el sentido habitual que se aplica a los delincuentes adultos. Otras formas de tratar a los jóvenes infractores incluyen desestimar el caso por medio de la emisión de una licencia o tras el pago de una fianza (garantía), confiar al niño al cuidado de un familiar o de una persona apta para ello y ordenar el pago de una multa en lugar de entrada en prisión/custodia, puesta en libertad tras el pago de una fianza, o internamiento del joven en un lugar de detención que no sea una prisión, como se ha explicado anteriormente.

81. La Ley de Educación de 2013 prevé medidas para desarrollar y mejorar los sistemas de enseñanza primaria (grados 1 a 6) y secundaria (grados 7 a 13), y promueve la educación obligatoria de los niños de edades comprendidas entre los 6 y 15 años, en los grados 1 a 9. Todas las decisiones y funciones relativas a la educación deberán tener en cuenta el principio del interés superior del niño. La Ley prevé la educación gratuita en las escuelas primarias y secundarias públicas y estipula que los progenitores deben inscribir a sus hijos en edad de escolarización obligatoria, sin aducir motivos de sexo, religión, raza o discapacidad para no matricularlos en la escuela: se impondrá una multa de 50 dólares a los progenitores que no matriculen en la escuela a los hijos en edad de escolarización obligatoria.

82. Existe también una disposición relativa a un entorno escolar sano y seguro, que se refiere a instalaciones sanitarias limpias, bien mantenidas, seguras y adecuadas tanto para los estudiantes como para el personal. Al respecto, se señala que los padres deberán mantener a sus hijos en el hogar cuando padezcan una enfermedad contagiosa y notificar al Director de la escuela. Se permite la readmisión de los niños previa presentación de un certificado médico.

83. La disciplina debe ser no discriminatoria y acorde con la dignidad y los derechos del estudiante, y se impondrá solo después de haber escuchado la versión del estudiante sobre los hechos por los cuales sería objeto de medidas disciplinarias; se han abolido los castigos corporales, y la suspensión y la expulsión son medidas de último recurso. Las normas de las escuelas deben promover la seguridad, el bienestar y la buena conducta de los estudiantes.

84. En virtud de la Ley *Te Rau n te Mwenga* de 2014 (Ley sobre la Paz Familiar), la protección infantil se aplica a toda persona menor de 18 años. El propósito de esta Ley es ofrecer seguridad, protección y compensación a las víctimas de la violencia doméstica, aplicar programas eficaces para asegurar la recuperación de las víctimas, facilitar el cumplimiento de las órdenes judiciales con respecto a la violencia doméstica, y promulgar los principios de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

85. La Ley reconoce que la violencia doméstica trasciende la violencia física, psicológica y económica, lo que entraña la explotación de cualquier forma de autoridad, incluida cualquier forma de abuso que victimice a un niño, un joven o una mujer con repercusiones en su bienestar y su futuro. La Ley también prevé la protección de todos los miembros de la familia ampliando el significado de la violencia doméstica más allá de lo que tradicionalmente se consideraba como una cuestión entre marido y mujer únicamente, para abarcar las relaciones sexuales presentes y pasadas y otros vínculos familiares. Antes de la entrada en vigor de la Ley sobre la Paz Familiar, la violencia doméstica estaba tipificada como delito en el Código Penal, aunque en términos generales y poco específicos. La Ley afirma que la violencia doméstica, en todas sus formas, es inaceptable y constituye un delito que afecta a todos los sectores de la comunidad y todos los aspectos de la vida.

86. La Ley prevé órdenes de protección para garantizar la seguridad de la víctima y sus allegados. Cualquier miembro de la comunidad puede presentar una solicitud en nombre de la víctima de diversas maneras y a través de diversos tipos de plataformas de comunicación, como oral, escrita, telefónica, por radio, fax, texto, correo electrónico, etc. La orden es emitida por el tribunal tras llegar al convencimiento de que existe un peligro para la salud, la vida o el bienestar de la víctima. Todas las acciones se examinarán como corresponde en el tribunal, incluidos problemas de procedimiento graves en la solicitud formulada, y sus efectos en la víctima. Hay tres tipos de órdenes de protección: de emergencia, de protección temporal y orden definitiva. La Ley también establece órdenes de seguridad policial.

87. La Ley de Comunicaciones de 2013 protege a los menores de 16 años contra la explotación en actos obscenos, lo que incluye material pornográfico. Se prohíbe a los menores de edad o a cualquier persona que parezca serlo, realizar actos sexuales o aparecer en imágenes (incluidos vídeos) que representen una conducta sexual. La producción deliberada de pornografía infantil mediante la transmisión o distribución de vídeos o fotografías en los medios de comunicación constituye delito. También es delito facilitar la participación o la presencia de niños en material pornográfico en ordenadores o cualquier otro dispositivo. La sanción que se aplica en este caso es una multa de 10.000 dólares y dos años de prisión.

88. De conformidad con el capítulo 67 del Código Penal, los infractores menores de 16 años no satisfacen todos los requisitos para ser objeto de una sentencia del tribunal en circunstancias razonables. En primer lugar, el tribunal puede dictar una orden para colocar a la persona al cuidado de cualquier persona apta que esté dispuesta a hacerse cargo de ella, y ordenar el pago de manutención a los progenitores o tutores. En segundo lugar, el tribunal puede ordenar a los progenitores o tutores que establezcan una fianza por un monto que el tribunal considere apropiado para ejercer el cuidado y la tutela adecuados del menor. En tercer lugar, se puede ordenar a los progenitores/tutores que establezcan una fianza para cubrir los gastos de atención, protección o control que necesite el menor. Por último, si el delito se castiga con una multa o indemnización, el tribunal podrá ordenar dicho pago a los progenitores o tutores del menor de 16 años.

89. El secuestro de una niña menor de 18 años contra la voluntad de sus progenitores o tutores o de las personas que tengan su custodia legal, con la intención de mantener relaciones sexuales ilícitas con ella se considera actividad delictiva. La defensa del delito exige que existan motivos razonables para creer que la niña tiene 18 años o más.

90. En casos de corrupción o tentativa de corrupción de niñas menores de 13 años no se aplica el consentimiento como defensa. Para que exista corrupción o tentativa de corrupción de una niña mayor de 13 años pero menor de 15 años se requieren motivos razonables para creer que la niña es de esa edad o mayor; sin embargo, no se admite el consentimiento como defensa. Lo mismo se aplica a la entrega o tentativa de entrega de una niña menor de 18 años con el fin de que mantenga relaciones sexuales ilícitas con cualquier persona, como prostituta común o interna de un prostíbulo. Cuando el propietario u ocupante de un local ayuda o induce a sabiendas a una niña menor de 13 años a acudir a dicho local con el propósito de mantener relaciones sexuales ilícitas con cualquier hombre, dicho acto constituye una violación de la ley; la defensa del delito exige que existan motivos razonables para creer que la niña tiene 13 años o más. Si es mayor de 13 años pero menor de 15 años, la única defensa razonable es que la víctima (niña) tenga 15 años o más.

91. Los niños o los menores de 15 años están protegidos por la ley si sus propios progenitores o la persona que tiene la custodia los hace objeto de transacciones comerciales con la intención de utilizarlos en la prostitución o en relaciones sexuales ilícitas, especialmente por cualquier medio ilícito y con fines inmorales.

92. El infanticidio se considera homicidio si la mujer no se ha recuperado completamente del parto o ha sufrido trastornos durante el parto o la lactancia. La persona que suministre instrumentos o medicamentos a una mujer embarazada a sabiendas de que pueden ocasionar un aborto podrá ser condenada a diez años de prisión. El niño pasa a ser una persona que pueda ser víctima de homicidio si ha salido vivo del cuerpo de la madre, mientras que la destrucción de un niño consiste en ocasionarle la muerte antes de que tenga una existencia independiente de la madre. Sin embargo, la interrupción del embarazo puede hacerse de buena fe y con el objeto de preservar la vida de la madre.

93. El mantenimiento de relaciones incestuosas con una niña menor de 13 años es un acto criminal al que no es aplicable el consentimiento de la niña. El tribunal despojará a la persona condenada de toda autoridad sobre la menor de 18 años.

94. El jefe de familia que tenga a su cargo a un menor de 18 años (posteriormente enmendado en virtud de la Ley de Bienestar de la Infancia, la Juventud y la Familia) que sea miembro de su hogar tiene la responsabilidad de atender a las necesidades de ese niño. Las personas que contraten en su hogar empleados o aprendices menores de 18 años tienen la obligación de proporcionarles alimentos, ropa y vivienda. Por crueldad contra los niños por parte de cualquier persona que haya cumplido 18 años de edad y tenga la custodia de un niño o joven menor de 18 años se entiende agresión deliberada, maltrato, descuido, abandono o exposición a situaciones que den lugar a agresión, maltrato, descuido, abandono de una manera que pueda ocasionarle sufrimiento o lesiones innecesarios, o asfixia de un niño menor de 3 años por un adulto de 18 años en estado de embriaguez (consumo de alcohol). Los progenitores o las personas que tienen el control legal de un niño pueden administrarle un castigo razonable. El robo de niños menores de 14 años y el secuestro de una niña soltera menor de 15 años al cuidado de sus progenitores o de otra persona legalmente autorizada para ello también constituyen crueldad.

95. De conformidad con el capítulo 67 de la Ordenanza Penitenciaria, por menor de edad se entiende una persona de 16 años, y por persona joven se entiende personas de 16 a 18 años. Por motivos de precaución razonable no se admiten oficiales de prisiones de sexo masculino en las cárceles de mujeres. Se permite a las reclusas con hijos de corta edad tenerlos con ellas en la prisión, y se les proporciona ropa y otros artículos de primera necesidad, siempre que el niño ya no esté siendo amamantado, pero, si el oficial tiene la certeza de que hay familiares o amigos en condiciones de mantener al niño, y que están dispuestos a hacerlo, se les hace entrega del niño. Por razones de seguridad y protección, no se permite alojar juntos a hombres y mujeres encarcelados. Los jóvenes y los adultos deben estar separados con el fin de evitar el acoso y el abuso. Las reclusas deben realizar trabajo en condiciones adecuadas.

96. De conformidad con el capítulo 5 s91) de la Ordenanza sobre la Inscripción de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios, todo nacimiento que se produzca en Kiribati debe inscribirse en el registro civil del distrito en el que haya nacido el niño. Cuando no existe información fidedigna sobre el nacimiento de un niño al que se haya encontrado abandonado, el nacimiento deberá inscribirse en el lugar en el que se haya encontrado al niño. Es obligación de los progenitores, o de la persona presente en el momento del nacimiento, del médico o de la partera que atendió el parto, inscribir el nacimiento y dejar constancia de toda otra información necesaria en el registro civil. En el caso de un niño que aún no esté inscrito, la persona que esté a cargo del niño encontrado deberá inscribir el nacimiento según su mejor saber y entender. La inscripción de los nacimientos es gratuita durante los 12 meses siguientes al nacimiento. La inscripción tardía hace necesario pasar por un proceso de evaluación y puede acarrear ciertos costes. Se podrá imponer un proceso adicional en caso de penalidad por inscripción tardía. Existe un proceso diferente para la inscripción de los nacimientos de niños fuera del matrimonio o hijos ilegítimos, en virtud del cual debe presentarse una solicitud conjunta por escrito y firmada tanto por la madre como por la persona que se reconoce a sí misma como padre del niño.

97. De conformidad con el capítulo 54 de la Ordenanza sobre el Matrimonio, las personas de edades comprendidas entre los 18 y 20 años pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus progenitores o tutores. No se necesita ese consentimiento si ambos miembros de la pareja han cumplido 21 años. No se permite el matrimonio de menores de 18 años. Se necesita el consentimiento de los progenitores y los tutores, o, si uno de los progenitores o ambos han fallecido, se puede obtener el consentimiento del encargado del registro civil; de lo contrario, se procede teniendo en cuenta el interés superior de las partes.

98. La custodia de niños menores de 18 años se dirime en los tribunales teniendo en cuenta el bienestar del niño y la conducta y los deseos de ambos progenitores. La persona que ostenta la custodia del niño deberá proporcionarle los cuidados adecuados.

99. El capítulo 61 de la Ordenanza sobre las Tierras Nativas se refiere al Código de Tierras de las Islas Gilbert y Fénix, que fue declarado como ley que rige los derechos de los aborígenes sobre las tierras en todas las islas de Kiribati. Esta ley establece el derecho de los hijos a heredar bienes de sus padres y familiares.

100. De conformidad con el Código de Tierras de las Islas Gilbert y Fénix, el propietario no deberá impedir que sus vástagos obtengan sus medios de vida de sus tierras. El tribunal podrá reservar una parcela para los vástagos y evitar que el propietario utilice dicha parcela. Esta ley codifica las distintas prácticas consuetudinarias de las islas de Kiribati.

101. En el caso de Nikunau y Arorae únicamente, no se podrá desheredar a un hijo, sin importar que sea negligente o que haya contraído matrimonio sin el consentimiento de sus progenitores. En otras islas, los parientes más cercanos podrán ser desheredados o no recibir parte alguna de la herencia del propietario si han tenido un comportamiento negligente hacia el propietario (progenitores).

102. En el artículo 4 se describe la distribución de la herencia y de las donaciones en vida permitida por el tribunal si los vástagos no quedan en situación de penuria después de la distribución, y si no es manifiestamente injusta para los vástagos (hijos/nietos de la persona); el tribunal puede pedir la opinión de los vástagos antes de autorizar la distribución. Se permiten las donaciones a nietos adoptados si la adopción ha sido registrada ante el tribunal. El niño adoptado siempre recibe la herencia de sus padres biológicos, independientemente de la adopción. Se admitirá el testamento del propietario sobre la partición de sus bienes si es conforme a la ley. En caso de no haber testamento, los bienes se distribuirán como sigue: si hay más de una esposa, el hijo mayor de la primera esposa será el administrador, o la hija mayor si no hay hijos con la primera esposa; los hijos de la primera esposa recibirán las mejores tierras, y las demás esposas recibirán partes iguales entre ellas. Sin embargo, algunos vástagos podrían quedar en situación de penuria a causa de la distribución; el tribunal distribuirá la herencia por igual entre todas las esposas. En Beru y Nikumaroro, el hijo mayor recibe las mejores tierras, sin importar que la madre sea la primera, segunda o tercera esposa —el resto de la herencia se distribuye por igual entre las esposas.

103. El hijo mayor recibe más que sus hermanos y hermanas. La hija mayor recibe más que sus hermanas más jóvenes. Cuando no hay hijos, la hija mayor recibe más que las hermanas menores. En Makin, Butaritari, la herencia se distribuye por igual entre todos los hijos. En Tamana, Arorae, los hijos reciben más que las hijas y el primogénito no recibe nada adicional. Una hija puede recibir un estanque piscícola o una trampa para peces en caso de no haber hijos, si los progenitores o hermanos así lo deciden. Si el propietario posee muchos estanques piscícolas o trampa para peces, el tribunal podrá ordenar que se otorgue una parte a una hija, pero únicamente después de que los hijos hayan recibido la parte que les corresponde. Con respecto a Makin, Butaritari, Nikunau, Tamana y Arorae, los hijos e hijas deben compartir por igual los estanques piscícolas y trampas para peces. Los habitantes de Kiribati obtienen su alimento del mar cada día, por lo que los estanques piscícolas y trampas para peces son muy importantes para su supervivencia. En el caso de bienes mancomunados, el tribunal puede aprobar la distribución si el niño ha recibido una parte justa de los bienes mancomunados. El tribunal podrá aprobar la venta de tierras, pozos o estanques piscícolas si las tierras restantes del propietario son suficientes para los niños.

104. El proyecto de ley sobre el cuidado y educación de la primera infancia, de 2017, establece un mecanismo de regulación y supervisión de los servicios de atención y

educación de la primera infancia en Kiribati. En la actualidad no existe ninguna disposición legal relativa a tales servicios y el proyecto de ley creará, en esencia, un marco y un programa de educación formal para los niños de menos de 3 a 6 años de edad que cursen la enseñanza primaria. El proyecto de ley está en concordancia con las obligaciones del Gobierno en función de la Declaración de Putrajaya, relativa a la educación de la primera infancia. El Gobierno tiene el propósito de hacer extensiva la educación obligatoria, y ulteriormente gratuita, a los niños de corta edad, y el proyecto de ley allana el camino para alcanzar ese objetivo.

105. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas. La Constitución garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos en relación con la mayoría de las esferas de requisitos enunciados en la Convención. Existe una cláusula antidiscriminatoria, pero no por motivos de sexo o género.

106. La agresión sexual es una forma de violencia de género, que en la mayoría de los casos se comete contra niñas y mujeres, que debe prevenirse y remediarse en la medida de lo posible recurriendo a medios legislativos. El Código Penal de Kiribati prohíbe la agresión sexual; sin embargo, esa disposición no ofrece una protección adecuada contra varias formas de violación sexual contra las niñas y las mujeres. Otros delitos contra las mujeres y niñas previstos en el Código Penal incluyen las relaciones incestuosas y la violación por penetración con los dedos. El infanticidio también figura en el Código Penal; sin embargo, reduce la acusación de asesinato a homicidio, en lugar de sustituir el asesinato y el homicidio por un delito separado y la correspondiente sanción. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer asegura el acceso de la mujer a los servicios de atención de la salud, incluidos los relacionados con la planificación familiar. El aborto está tipificado como delito en Kiribati y acarrea una severa pena de cadena perpetua, y aunque puede practicarse legalmente para salvar la vida de la madre, las mujeres no tienen el derecho de acceso a servicios de aborto en condiciones de seguridad.

107. En relación con el matrimonio, Kiribati cumple plenamente las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que establece la equiparación de la edad mínima para contraer matrimonio para muchachos y muchachas a la edad de 21 años, y exige la inscripción de todos los matrimonios y el consentimiento de ambos progenitores para el matrimonio de menores, de edades comprendidas entre los 18 y 20 años. Sin embargo, aunque la bigamia es delito, estas disposiciones no son aplicables al matrimonio consuetudinario, que no se considera como un matrimonio anterior válido.

108. Además, la legislación de Kiribati prevé órdenes de manutención durante la separación y después del divorcio, tanto para los hijos como para las esposas. La manutención es para “cualquier persona”, por lo que en principio incluye tanto a las mujeres en relaciones heterosexuales de hecho como a las mujeres en relaciones con personas de su mismo sexo, aunque hasta la fecha no se reconocen las relaciones entre personas del mismo sexo. El caso de los hijos de mujeres solteras se contempla de manera específica en el Código de Tierras, de conformidad con criterios discrecionales. Aunque Kiribati ha adoptado la norma recomendada del interés superior del niño como consideración primordial en las disputas por la custodia de los hijos tras una separación o divorcio, las madres solteras pierden automáticamente la custodia de sus hijos a la edad de dos años, la cual pasa al padre (siempre que éste reconozca la paternidad y desee ejercer dicha custodia).

109. Además de la abolición del castigo corporal, ya mencionada, la Ley de Educación también prohíbe a los principales responsables del sector y a los órganos encargados de cuestiones disciplinarias imponer medidas disciplinarias a una estudiante embarazada. También aplica esa prohibición con respecto a los estudiantes que son padres. Se asegura así la igualdad de trato, en consonancia con las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

110. En lo que respecta al sector laboral, el nuevo Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015 revocó la anterior Ordenanza y contiene una disposición antidiscriminatoria que exige que todos los empleadores ofrezcan las mismas oportunidades

laborales. La prohibición abarca la discriminación por motivos de sexo, embarazo, estado civil y orientación sexual o responsabilidades familiares, entre otras numerosas razones. También establece la obligación del empleador con respecto a la igualdad de la remuneración de hombres y mujeres por trabajo de igual valor. De conformidad con otras disposiciones antidiscriminatorias, no podrá exigirse a una empleada que se someta a una prueba de embarazo, entre otros exámenes médicos, como condición de empleo o durante el transcurso del empleo.

111. Además, el Código prevé otras medidas en relación con el trabajo nocturno y ordena a los empleadores que proporcionen a las empleadas embarazadas una alternativa al trabajo nocturno, no menos de 16 semanas, de las cuales al menos 8 deberán ser anteriores a la fecha prevista de parto de la empleada. Entre las diversas razones ilegales de cese del empleo, previstas en el Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015, figura la terminación de la relación de trabajo por la ausencia de la empleada cuando ello guarda relación con el disfrute de la licencia por maternidad, o si la ausencia se produce durante las 12 semanas posteriores a la licencia por maternidad a causa de una enfermedad como resultado del embarazo o del parto, certificada por un médico. Existe también una disposición sobre el acoso sexual que protege tanto a los empleados como a los posibles empleados y estipula la obligación del empleador de garantizar la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo. Esto significa que si un empleado comete actos de acoso sexual, el empleador también será responsable, a menos que pueda demostrar que había adoptado todas las medidas razonables para impedir esa conducta.

112. La Constitución prohíbe la discriminación por varios motivos, y aunque se aplica a todos los ciudadanos en general, incluidas las personas con discapacidad, no se hace mención específica de la discapacidad como motivo protegido.

113. La discapacidad es un tema que se aborda con amplitud en la Ley de Educación de 2013, en la que por estudiante con discapacidad se entiende aquel cuyas necesidades educativas deben adaptarse a sus necesidades individuales y a otras formas de apoyo y asistencia a fin de maximizar su desarrollo académico y social. La Ley estipula que las reglas de la escuela se aplicarán sin discriminación por diversos motivos, como sexo, religión, raza, o discapacidad del alumno. También establece la educación obligatoria y el hecho de que los niños con discapacidad que alcancen la edad de escolaridad obligatoria no deberán ser privados o excluidos de la educación primaria y secundaria gratuita.

114. Otro instrumento legislativo sobre la discapacidad es el Código de Empleo y Relaciones Laborales de 2015, que define la discapacidad como una deficiencia física, una enfermedad física, una deficiencia intelectual o psicológica, o la presencia de organismos patógenos en el cuerpo. El Código protege a los empleados y posibles empleados contra una amplia gama de motivos de discriminación como la edad, el estado de salud, el hecho de estar infectados por el VIH/sida, o la discapacidad de la persona.

115. Las Normas Nacionales sobre Infraestructura del Código Nacional de Construcción de Kiribati se actualizaron en 2015 para exigir que todos los nuevos edificios cumplan las normas de diseño universal y se asegure así la accesibilidad para todos.

116. El poder judicial de Kiribati es el único responsable por la interpretación y aplicación de las leyes aprobadas por los órganos legislativos, así como por la solución de controversias entre los ciudadanos y el Estado. El Tribunal de Apelación es competente para conocer de las apelaciones en materia civil y penal contra decisiones de cualquier Tribunal Superior sobre toda cuestión de derecho, así como para conocer de las apelaciones del Tribunal Superior con competencia de apelación en cuestiones relacionadas con las tierras, entre otras. El Tribunal Superior parece tener competencia original ilimitada en causas civiles y penales, así como para resolver controversias sobre la validez de la elección de cualquier miembro del *Maneaba ni Maungatabu* y sobre los escaños vacantes. Los tribunales de primera instancia tienen competencia limitada pero generalmente se ocupan de la mayoría de los asuntos civiles y penales dentro de los límites del distrito en el que están situados, lo que incluye la jurisdicción para tratar la mayoría de las cuestiones relacionadas con las tierras (Sistema de Información de los Tribunales de Kiribati, PacLII).

117. El Gobierno cuenta con algunas autoridades administrativas. El Centro de Atención al Cliente y Presentación de Reclamaciones es un mecanismo que funciona como parte de

la Oficina de la Administración Pública, a la que los consumidores pueden dirigir sus reclamaciones sobre violaciones de los derechos del consumidor.

118. El Tribunal establecido por el Código de Trabajo y Relaciones Laborales es un mecanismo para conocer de las quejas relativas a la terminación de la relación laboral y otras decisiones insatisfactorias en el sector laboral.

119. A continuación se describen casos que permiten conocer si las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos pueden ser, o han sido, invocadas o aplicadas directamente por los tribunales, en particular en lo relativo a las convenciones ratificadas y los derechos constitucionales y la reparación.

120. *República de Kiribati c. Iaokiri*, causa penal núm. 25 de 2004; *Pacific Human Rights Law Digest*, vol. 1. Este caso esclareció la situación de la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con la legislación nacional. El Comité de los Derechos del Niño se utilizó para oponerse al requisito de corroboración de las pruebas presentadas por la niña, pero fue en vano, ya que el Tribunal rechazó el argumento.

121. El inculpado fue acusado de atentado al pudor contra una niña de 15 años. La cuestión era si las pruebas de la víctima necesitaban ser corroboradas, a lo que la Fiscalía argumentó que no era necesario ya que ese requisito se había abolido en virtud de la Ley de Pruebas de 2003. El Tribunal sostuvo que puesto que el delito se había cometido antes de la entrada en vigor de la Ley de Pruebas, aplicaría el derecho consuetudinario, decidió que era peligroso condenar a la menor sobre la base de pruebas no corroboradas y pronunció una advertencia al respecto. El Tribunal dictaminó, además, que la Convención sobre los Derechos del Niño no formaba parte de las leyes del país a menos que se le diera fuerza de Ley. La referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño se hizo únicamente con respecto a la situación de los convenios y convenciones internacionales en relación con las leyes nacionales, pero el Tribunal no examinó la forma en que las normas de corroboración podrían verse afectadas por la Convención.

122. *República de Kiribati c. Timiti & Robuti*, causa penal núm. 43/97 del Tribunal Superior; *Pacific Human Rights Law Digest*, vol. 1. En este caso, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se utilizó para argumentar que la “advertencia de corroboración” debía abolirse por constituir discriminación con arreglo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Constitución de Kiribati.

123. Los inculpados fueron acusados de violación. El Tribunal determinó que las pruebas presentadas por la víctima eran fidedignas a pesar de que algunas partes eran incompatibles con la denuncia policial que había efectuado dos días después del incidente. Por otro lado, las pruebas de los acusados se consideraron ilógicas y sus abogados alegaron que la víctima sufría de una enfermedad que la hacía imaginar cosas y perturbaba su razonamiento, y argumentaron también que había existido una falta total de corroboración. Por el contrario, la Fiscalía impugnó la norma de corroboración señalando que constituía una violación de los derechos de la mujer por motivos de discriminación por sexo. La Constitución garantiza la protección de la mujer ante la ley y contra los motivos de discriminación prohibidos, y si bien no menciona específicamente el sexo como motivo prohibido de discriminación, debe interpretarse de conformidad con los principios enunciados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el sentido de discriminación por motivos de género.

124. El Tribunal condenó a los acusados, pero rechazó los argumentos alternativos presentados por la Fiscalía. Sostuvo que si se exculpaba a los acusados ello se debería a que la víctima no podía cumplir con el requisito de pruebas corroboradas, y a que no se la consideraba digna de crédito. No era necesario examinar la pertinencia de la Convención porque el Tribunal sí consideraba que las pruebas aportadas por la víctima eran dignas de crédito.

125. *Fiscalía c. MBWE* [2006] *KICA* 3; *Pacific Human Rights Law Digest*, vol. 2. La Fiscalía interpuso un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de anular la orden de que el acusado ingresara en prisión por seis meses por desacato al Tribunal de Primera Instancia de la isla de Nikunau. El Tribunal Superior había ordenado que el demandado

fuera puesto en libertad y que la Fiscalía le pagara la suma de 1.250 dólares australianos en concepto de reparación. La Fiscalía apeló exclusivamente contra esa orden de reparación. El acusado permaneció detenido en espera de juicio durante varios meses sin tener acceso al tribunal principal de la capital, Tarawa. La principal preocupación de la Fiscalía era la posibilidad de que las personas afectadas negativamente por irregularidades procesales se utilizaran este caso como precedente para reclamar el derecho a una indemnización en virtud de la Constitución cada vez que esto ocurriera. La Fiscalía sostuvo también que esa indemnización debía reservarse para los casos más extremos, a diferencia de aquellos en los que se tenía la posibilidad de recurrir a otras opciones legales, como el proceso de apelación.

126. El Tribunal de Apelación examinó la cuestión de si el caso del demandado constituía una violación de derechos que hacía necesaria una reparación constitucional u otro recurso no constitucional, y posteriormente desestimó la apelación. Se sostuvo que este era uno de esos raros casos en los que una persona había sufrido no solo a causa de una subversión fundamental del estado de derecho sino también por la falta de medios eficaces para superar el problema por los cauces procesales convencionales. Este caso reafirma que los derechos del acusado siguen siendo primordiales durante todo el proceso judicial. El Tribunal debe tener muy en cuenta los derechos de los acusados y garantizar su protección. Sin embargo, hay que tener presente que no en todos los casos que involucran errores de procedimiento por parte del Estado las violaciones justifican la reparación constitucional, tal como se aplica a casos poco comunes como este.

127. *Teriaki c. Kauongo* [2009] KIRC 27. *Pacific Human Rights Law Digest*, vol. 4. El Tribunal Superior examinó un caso relativo a la vulneración del derecho constitucional a la libertad de circulación del demandante, que era el alcalde electo del Consejo Insular de Maiana y los principales acusados eran ancianos del Tebau, representantes de un grupo tradicional del “sistema *unimwaane*” de la isla. A raíz de una controversia en el Consejo Insular, el Tebau ordenó la disolución del Consejo y la dimisión de los concejales, que no podrían ser reelegidos por un período de cuatro años. El demandante se negó y pidió que se declarara que la decisión de los acusados era ilegal y solicitó que se declarara que habían violado su derecho constitucional a la libre circulación cuando decidieron que él y toda su familia debían abandonar la isla como sanción cuando se negó a dimitir. Los ancianos respondieron que su decisión como ancianos del Tebau estaba por encima de toda ley y que lo era así desde tiempos inmemoriales.

128. Un aspecto consistía en determinar si Tebau podía disolver legalmente el Consejo Insular y ordenar la dimisión de sus miembros. El segundo aspecto se refería a si el demandante podía exigir reparación a particulares por la violación de sus derechos constitucionales. Se examinaron la Constitución de Kiribati y la Ley de Gobierno Local de 1984.

129. El Tribunal Superior sostuvo que la decisión del Tebau relativa a la disolución del Consejo y sus miembros era ilegal y no surtía efecto. Los poderes consuetudinarios de ese sistema, aunque se practica en la mayoría de las islas de Kiribati, siguen estando sujetos a la ley suprema del país y, en consecuencia, a las leyes promulgadas en virtud de ella, como la Ley de Gobierno Local. Esa Ley, en particular, establece un código completo sobre cuestiones relativas a la creación de los consejos insulares, las elecciones y la destitución de los miembros. El Tebau tenía la facultad de nombrar a los miembros del Consejo en virtud de la Ley de Gobierno Local, pero no de disolver el Consejo u obligar a sus miembros a dimitir, por lo que el Tribunal consideró que las acciones del Tebau no estaban autorizadas por la Ley y no surtían ningún efecto legal. Además, el Tribunal admitió que tenía facultad para conceder una reparación a particulares por la violación de derechos constitucionales de otra persona. Sin embargo, en este caso el Tribunal no hizo una declaración en el sentido de que los acusados habían infringido el derecho constitucional a la libre circulación del demandante. Cabe señalar que el recurso de una declaración es discrecional y que los tribunales pueden rechazar dicha orden si la consideran innecesaria y, en este caso, habría sido suficiente esclarecer la situación jurídica de todos los interesados.

130. La Defensoría del Pueblo, dependiente del Ministerio de Justicia, presta asistencia jurídica gratuita a personas en situación de desventaja o que no disponen de medios para acceder a una representación remunerada. La Defensoría es una oficina pública

independiente, establecida para prestar servicios gratuitos, incluidas la representación y asesoría en asuntos de tierras, civiles y penales en los tribunales de primera instancia, el Tribunal Superior, y el Tribunal de Apelación. También hay bufetes de abogados privados que ofrecen representación legal previo pago. Sin embargo, en la actualidad, no existen normas que regulen los honorarios de los abogados privados.

131. En Kiribati no hay ninguna institución de derechos humanos, por lo que se confía en que la comunidad internacional considerará la posibilidad de prestar asistencia técnica y financiera para establecer esa institución en el futuro. La creación de una Comisión de Derechos Humanos en la región sería una medida acertada.

132. Al nivel del Gobierno central se ha establecido el Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales, que presta servicios sociales eficientes y eficaces en beneficio de todos los ciudadanos, en especial los miembros más vulnerables de la comunidad. Bajo la supervisión del Ministerio, la División de Bienestar Social se ocupa del bienestar de la infancia y de los servicios para las personas de edad.

133. En ese mismo Ministerio funciona también la División para el Adelanto de la Mujer, que se había establecido en 2011 en el marco del antiguo Ministerio del Interior y Asuntos Sociales, y que se encarga de facilitar y promover el adelanto, el perfil y la igualdad de género de la mujer en el país mejorando su condición y sus medios de vida mediante el acceso en igualdad de condiciones a los derechos y recursos, las oportunidades y los servicios, y su plena participación en el desarrollo social, económico y político. La División para el Adelanto de la Mujer es el órgano de aplicación de las políticas, programas y leyes sobre la mujer y el género, y el órgano de coordinación de los programas de eliminación de la violencia sexual y por motivos de género en Kiribati. La División mantiene una base de datos y elabora informes sobre la mujer y el género para el Gabinete y los principales donantes del programa. También auspicia eventos nacionales como el Día Internacional de la Mujer, el Día del Lazo Blanco y los 16 Días de Activismo. Además, presta apoyo técnico a las organizaciones de mujeres y a las partes interesadas, y contribuye a la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la mujer.

134. La División para el Adelanto de la Mujer es miembro central del Grupo de Trabajo Nacional de Derechos Humanos de Kiribati y dirige la preparación de los informes del país sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

135. La División de Bienestar Social se compone de dos unidades: la Unidad de Prestaciones Sociales y la Unidad de Bienestar Social y Asesoramiento. La primera es responsable del Fondo de Apoyo a las Cuotas Escolares (para huérfanos o hijos de personas con discapacidad) y el Fondo para las Personas de Edad (para ciudadanos mayores de 65 años).

136. Por otra parte, la Dependencia de Bienestar Social y Asesoramiento centra su interés principalmente en programas de protección de la infancia y presta asesoramiento en cuestiones de familia a los miembros desfavorecidos de la comunidad para superar los obstáculos y la mentalidad de dependencia y sustituirla por la voluntad de alcanzar la autosuficiencia y de fomentar la autoestima y la confianza en uno mismo. La Dependencia lleva a cabo las siguientes actividades: prestación de servicios de asesoramiento a parejas, niños victimizados y otros miembros de la familia, aplicación de la Política de Atención y Protección para abordar el abuso infantil y otros problemas en la familia, aplicación de la Ley de Justicia Juvenil de 2015 y políticas conexas, elaboración de programas educativos como los relativos a la parentalidad positiva y la coordinación de programas antes de contraer matrimonio y durante el matrimonio en casos de pensión alimenticia y custodia de los hijos, prestación de ayuda y orientación a los supervivientes de la violencia doméstica que necesiten atención inmediata o evacuación, y otras actividades según cada caso, y la coordinación de los informes de Kiribati sobre la Convención sobre los Derechos del Niño.

137. La Dependencia de Inclusión de la Discapacidad es la primera oficina gubernamental cuya misión se refiere a las personas con discapacidad. Establecida en el marco del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales, se ocupa de mejorar la situación de las personas con discapacidad mediante la creación de una sociedad integradora y libre de obstáculos, y el fomento del empoderamiento de las personas con

discapacidad asegurando la igualdad de oportunidades, la participación significativa en la comunidad, así como el pleno disfrute de sus derechos humanos. Entre los objetivos de la Dependencia cabe mencionar el fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre las partes interesadas, la búsqueda de medios de influir en todos los programas de desarrollo de modo que incorporen la perspectiva de la discapacidad, la promoción de la comprensión al nivel local de los derechos de las personas con discapacidad, y la colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad para mejorar la vida de sus miembros. La Dependencia dirige la preparación de los informes del Estado sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

138. En el presupuesto del Gobierno correspondiente a 2019 se asigna a la División para el Adelanto de la Mujer la suma de 184.707 dólares, mientras que la División de Bienestar Social recibe 4.841.741 dólares. La División de la Juventud cuenta con 189.542 dólares, mientras que a la División de las organizaciones no gubernamentales (ONG) se le asignan 78.801 dólares. El presupuesto ordinario total del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales para 2019 asciende a 11.619.617 dólares, mientras que en 2018 fue de 7.640.255 dólares.

139. En 2014 se formuló la propuesta de establecer la División de Derechos Humanos como medio de aplicar las recomendaciones del primer ciclo del examen periódico universal (EPU) (2010). La División inició sus actividades en enero de 2015 como parte del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales. En septiembre de 2016 la División se trasladó al Ministerio de Justicia. El Ministerio matriz tiene gran interés en que la División continúe centrando sus actividades, sin reservas, en los derechos humanos. La División está integrada por el Oficial Principal de Derechos Humanos, que es el Jefe del Departamento, y el Coordinador Nacional, cargo establecido en función del memorando de entendimiento acordado entre el Gobierno de Kiribati y la Comunidad del Pacífico. El Coordinador Nacional presta servicios de asesoramiento técnico y coordinación para los programas en el país del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Comunidad del Pacífico. También se cuenta con tres Oficiales de Derechos Humanos, y existen planes para continuar la ampliación del Departamento en 2019.

140. La División se encarga de la coordinación, aplicación, presentación de informes y supervisión de las obligaciones internacionales en virtud del EPU y los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas ratificados por Kiribati. La visión y la misión de la División se centran en el cumplimiento de esas obligaciones internacionales mediante la prestación de apoyo y asistencia técnica gubernamentales para el respeto, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos en Kiribati. La División también aspira a sentar las bases del Gobierno, asegurando que la buena gobernanza y la rendición de cuentas se logren mediante la aplicación de un enfoque del desarrollo nacional basado en las normas de derechos humanos en todos los niveles de liderazgo.

141. La División de Derechos Humanos se encarga de supervisar la finalización y presentación del documento básico común y los futuros informes para el EPU. También colabora con otros departamentos responsables como la División para el Adelanto de la Mujer, el Departamento de Bienestar Social y la División de Inclusión de la Discapacidad, con el propósito de acelerar la redacción y la presentación de los informes del país sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

142. Otra de las funciones básicas de la División de Derechos Humanos consiste en supervisar el cumplimiento por parte del Gobierno de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados a los que se ha adherido, además de evaluar la actuación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para convertir las normas de derechos humanos en políticas, leyes y prácticas nacionales. La División también presta asesoramiento normativo con el fin de ayudar a los departamentos gubernamentales a integrar los derechos humanos en las tareas que se les han encomendado, y presta apoyo a la reforma institucional y el fomento de la capacidad.

143. Un aspecto importante de las funciones de los oficiales de derechos humanos es la prestación de servicios de secretaría para cualquier actividad del Mecanismo Nacional de

Presentación de Informes e Implementación de los Derechos Humanos, conocido como Grupo de Trabajo Nacional de Derechos Humanos de Kiribati.

144. Los Oficiales de Derechos Humanos también se encargan de la promoción de los derechos humanos, a modo de actividades de concienciación pública y programas de extensión comunitaria. Esa labor incluye la formulación de una amplia gama de estrategias de promoción, educación, formación, información pública, comunicaciones, investigaciones y establecimiento de redes y vínculos.

145. La División se ha comprometido a abordar las violaciones relacionadas con los derechos humanos y la discriminación, razón por la cual trabaja en estrecha cooperación y coordinación con los organismos del Gobierno y la sociedad civil para hacer frente a problemas nacionales como la violencia de género y todas las formas de discriminación.

146. El Ministerio de Justicia es responsable del mantenimiento y mejora sostenibles de la administración de justicia, haciendo especial hincapié en la protección y preservación de los derechos humanos, y de la implementación y ejecución de políticas que sustentan la seguridad nacional. En 2018 se le asignó la suma de 3.156.851 dólares australianos, y en 2019 la suma asignada es de 3.403.071 dólares. Desde su establecimiento en 2017 en el marco del Ministerio de Justicia, el presupuesto ordinario de la División de Derechos Humanos ha sido relativamente bajo, con un total de aproximadamente 74.547 dólares australianos a partir de 2018. No obstante, en 2019 el presupuesto de la División registró un aumento al habersele asignado la suma de 120.449 dólares, que incluye las partidas de Operaciones y Emolumentos Personales.

147. Kiribati no ha aceptado la competencia de ningún tribunal regional de derechos humanos u otros mecanismos regionales ya que actualmente no existe ninguno en la región del Pacífico Sur. Por otro lado, el Gobierno apoya la propuesta que actualmente se estudia en la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico relativa a establecer una institución regional de derechos humanos.

E. Marco de promoción de los derechos humanos a escala nacional

148. No existe ningún requisito legal que obligue a los miembros del Parlamento a aprobar o examinar las ratificaciones de tratados en el Parlamento, pero se celebran numerosas consultas y diálogos sobre cuestiones de derechos humanos con los miembros del Parlamento, financiados por el Equipo de Recursos de Derechos Regionales de la Comunidad del Pacífico y otros organismos. Durante el segundo ciclo del EPU, Kiribati recibió una recomendación relativa al establecimiento de una institución nacional de derechos humanos. Hasta la fecha no se ha establecido esa institución pero existen propuestas al respecto que requerirán la celebración de consultas nacionales y auditoría jurídica. Kiribati solo cuenta con mecanismos como el Grupo de Trabajo Nacional de Kiribati sobre los Derechos Humanos y la División de Derechos Humanos.

149. Las versiones en inglés de los tratados ratificados por Kiribati se comparten con las comunidades durante los programas de divulgación y concienciación para diferentes organizaciones y comunidades, y cuando se efectúan visitan a las islas periféricas del país. Debido a su texto relativamente corto, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el único instrumento que se ha traducido, pero no se ha publicado oficialmente, y solo se distribuye cuando es necesario durante los talleres de divulgación y concienciación.

150. El Gobierno ha colaborado con la Secretaría de la Comunidad del Pacífico/Equipo Regional de Recursos sobre Derechos, el ACNUDH, el UNICEF y otros organismos para facilitar la sensibilización y la formación en materia de derechos humanos de los funcionarios públicos. A finales de 2017 se impartió capacitación sobre derechos humanos y violencia doméstica a cargo de abogados de la Defensoría del Pueblo. En 2017 se impartió capacitación en materia de derechos humanos a concejales y alcaldesas por conducto del Programa de Capacitación de Mujeres Dirigentes Electas, una iniciativa del Ministerio del Interior financiada por el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Comunidad del Pacífico. También hay varios cursos de formación para

magistrados y jueces, que les permiten aplicar las normas de derechos humanos en sus funciones y en la adopción de decisiones.

151. La División de Derechos Humanos participó en los programas de las dependencias de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales de fomento de la capacidad de los agentes de policía. Esos programas concluyeron en 2017 con visitas a todas las islas periféricas, incluida la capital. Parte de la capacitación incluyó temas como los derechos humanos, las cuestiones de género, la religión y los derechos humanos, la Ley sobre la Paz Familiar y las facultades de la policía.

152. Se han llevado a cabo cursos de formación similares, pero con objetivos más específicos, destinados a los encargados del desarrollo curricular y de la redacción de los planes de estudios. Ello tiene por objeto apoyar la incorporación de los derechos humanos y otros temas conexos en el recientemente elaborado plan de estudios para los cursos 5º, 6º, 7º, 8º, y 9º. Está previsto que en 2018 se impartan más cursos de capacitación en el sector de la educación a los profesores en formación de la Escuela Normal de Kiribati, con el fin de preparar mejor a los futuros profesores para la enseñanza de asignaturas de derechos humanos a los niños en las aulas.

153. En 2015 el Ministerio de Educación, por conducto del Centro de Desarrollo de Planes de Estudios y Recursos, inició la reforma de los planes de estudios de los cursos 5º y 6º de la enseñanza primaria, y los cursos 7º y 8º de la enseñanza secundaria. La reforma incluyó la incorporación de la ciudadanía social, los derechos humanos y otros temas conexos como parte del programa de la asignatura de educación moral.

154. La labor de reforma de los planes de estudios de los cursos 8º y 9º continúa, mientras que la etapa de aplicación en los niveles inferiores empezó en 2015. Para complementar los planes de estudios, se impartirá formación específica a los maestros sobre la comprensión de los temas recién incorporados y sobre la enseñanza de asignaturas de derechos humanos y otros temas conexos a los niños en las aulas. Los profesores en formación del Instituto de Formación de Kiribati y los profesores de las escuelas de las islas periféricas son los destinatarios de los próximos programas de formación financiados por el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Comunidad del Pacífico.

155. Como parte de la celebración anual del Día Internacional de los Derechos Humanos que organiza la División de Derechos Humanos, desde 2015 se emite un programa de radio interactivo, de una semana de duración, en el que se proporciona información básica sobre los derechos humanos y los servicios y cuestiones de derechos humanos en el país. Los oyentes tienen la posibilidad de responder a preguntas relativas al guion.

156. La División de Derechos Humanos también participa activamente en las celebraciones anuales que organiza el Ministerio de Justicia desde 2017, en las que se promueven las cuestiones de derechos humanos entre el público en general a través del mismo programa de radio y en la plaza de la ciudad donde suelen tener lugar esos actos anuales.

157. A mediados de 2018 la División de Derechos Humanos inició programas de divulgación en los distritos de Tarawa Sur dirigidos a las comunidades rurales con el objeto de concienciar sobre los derechos humanos y las correspondientes responsabilidades a los aldeanos, poniendo de relieve los principios subyacentes de los tres tratados de derechos humanos ratificados. Esos programas suelen ser interactivos, y en ellos las comunidades manifiestan reacciones tanto negativas como positivas. Los mismos programas se aplican en las islas periféricas, y a finales de 2018 se difundían en cuatro islas.

158. Hay más de 50 ONG registradas, que realizan actividades en distintas esferas, entre ellas el cambio climático y la prestación de servicios sociales y de desarrollo. Las ONG también participan en la construcción de escuelas, la prestación de servicios de atención primaria de la salud, la promoción de la planificación familiar, la prestación de ayuda a las personas con discapacidad, la concienciación con respecto a los derechos humanos y el cambio climático, y la prestación de ayuda al Gobierno para encontrar soluciones a sus efectos devastadores. La mayoría de esas ONG han participado en actividades de capacitación en materia de derechos humanos, que también incluyen la redacción de

informes paralelos y la presentación de informes de la sociedad civil al EPU y a los órganos creados en virtud de tratados.

159. Las ONG más activas son las constituidas por grupos de mujeres y de personas con discapacidad. Las entidades religiosas también han participado en actividades de fomento de la capacidad junto con el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Comunidad del Pacífico en torno a los derechos humanos y la violencia contra la mujer, dada la influencia que ejercen en el cambio de las actitudes y las percepciones, especialmente en relación con la violencia contra la mujer. En 2017 se celebró el primer diálogo sobre los Derechos Humanos y las Medidas Basadas en la Fe para Apoyar la Aplicación de la Ley sobre la Paz Familiar, en el que participaron las iglesias y las comunidades religiosas de Tarawa. Posteriormente se han celebrado otros diálogos que abarcan esferas de colaboración como la dedicación de un tema a la lucha contra la violencia en la familia desde el púlpito durante las celebraciones anuales del Día de los Derechos Humanos y el Día de la Madre, la posibilidad de incluir un tema sobre la eliminación de la violencia contra la mujer durante la celebración anual del Día del Evangelio, la revisión y posible reforma de la escuela dominical y de los planes de estudios de las escuelas teológicas para incluir la violencia en la familia y los derechos humanos, así como el establecimiento de un mecanismo interconfesional para coordinar las iniciativas comunes de lucha contra la violencia en la familia.

160. El Gobierno ha realizado numerosas actividades de concienciación y formación sobre los derechos humanos en colaboración con el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Comunidad del Pacífico, el ACNUDH, y otros organismos regionales. El antiguo Ministerio del Interior y Asuntos Sociales llevó a cabo cursos de formación práctica para la vida diaria que incluyeron la concienciación sobre los derechos humanos básicos. El Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales sigue celebrando cursos de capacitación para la juventud y la comunidad sobre la violencia doméstica y la defensa de los derechos humanos. La División de Derechos Humanos responde a invitaciones de los departamentos gubernamentales para facilitar conjuntamente actividades de formación sobre los derechos humanos y las cuestiones de género.

161. Aunque hay una sensibilización cada vez mayor de la población sobre los derechos humanos, Kiribati sigue enfrentándose a grandes desafíos en su camino hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Al nivel gubernamental hay una escasez de oportunidades de financiación para llevar a cabo una promoción a gran escala de los derechos humanos debido a las prioridades contrapuestas del Gobierno. Existen problemas de capacidad y conocimientos técnicos insuficientes, por lo que todavía se necesita impulsar el fomento de la capacidad en el país. La dispersión geográfica de las islas de Kiribati también es un importante obstáculo para los departamentos de ejecución.

162. Al nivel de la comunidad se tiene la percepción de que los derechos humanos socavan y contradicen las prácticas consuetudinarias y las normas tradicionales.

F. Proceso de presentación de informes a escala nacional

163. Bajo la Presidencia del Secretario de Justicia, el Grupo de Trabajo Nacional de Kiribati sobre los Derechos Humanos es el mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento en el ámbito de los derechos humanos, que sustituyó a los antiguos órganos especiales y a los Equipos de Tareas sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, respectivamente. El Grupo de Trabajo fue establecido por el Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales en 2014, y en 2015 se asignó a la División de Derechos Humanos la función de secretaría del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo está integrado por representantes de los ministerios con funciones de asesoramiento al Gobierno sobre los tratados de derechos humanos, el examen periódico universal y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

164. Los miembros que representan a sus ministerios son los que tienen acceso a información y datos pertinentes, por lo que están en posición de aportar esa información

para ayudar al Grupo de Trabajo y a la División de Derechos Humanos en la redacción de los informes del Estado y los informes para el EPU, o de cualquier otro informe que pueda necesitar el Gobierno en relación con los derechos humanos. Los miembros se encargan de verificar los proyectos de informe y aprobar la versión final antes de presentarla al Gabinete para su aprobación. También deben examinar las observaciones del Grupo de Trabajo sobre el examen periódico universal y otros convenios y convenciones ratificados.

165. El Grupo de Trabajo Nacional de Kiribati sobre los Derechos Humanos se reúne periódicamente para revisar el informe durante el proceso de redacción. La etapa de la recopilación de datos suele ser difícil. Se requiere constante verificación adicional respecto de los tres informes sobre la aplicación de tratados y, a menudo, la falta de respuesta de las partes interesadas retrasa el proceso.

166. También hay partes interesadas de las organizaciones de la sociedad civil y de las ONG, y se han celebrado varias consultas sobre los respectivos informes. Los miembros participan, asimismo, en la preparación del presupuesto y la obtención de fondos para actividades de derechos humanos.

167. No es obligatorio que los parlamentarios examinen los proyectos de informe del Estado en el Parlamento antes de su presentación final a los órganos de tratados, pero desde 2017 se celebran numerosas consultas y diálogos sobre cuestiones de derechos humanos y fomento de la capacidad, como parte del Taller sobre proyectos de ley del Ministerio de Justicia, antes de cada sesión parlamentaria.

168. El Grupo de Trabajo cuenta con un representante de las ONG. Por lo general, los informes se hacen llegar a las ONG pertinentes para su examen, como sucede, por ejemplo, con el informe sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La dependencia que dirige la elaboración del informe sobre esa Convención, la Dependencia de Inclusión de la Discapacidad en el marco del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales, celebró una consulta final sobre la versión definitiva con los miembros del Grupo de Trabajo y las organizaciones de personas con discapacidad. En la consulta se recogieron muchas respuestas positivas y aportaciones adicionales para el proyecto de informe.

169. La organización local de personas con discapacidad, *Te Toa Mataoa*, ha tomado la iniciativa de traducir el texto completo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al idioma de Kiribati. El texto traducido será objeto de revisión antes de su publicación.

170. Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún debate público sobre el informe o su traducción. Sin embargo, siempre hay ejemplares de los informes aprobados a disposición de quien los solicite.

171. El Parlamento, *Maneaba ni Maungatabu*, no establece ningún requisito legal que obligue a debatir los informes antes de su presentación, ni tampoco a revisarlos en el transcurso del proceso de redacción. No obstante, los parlamentarios tienen en cuenta esos informes en sus diálogos y consultas sobre derechos humanos.

172. El Gabinete, integrado por el *Beretitenti* y los ministros, tiene la última palabra en relación con los informes antes de su presentación. Los aprueban para su presentación al Comité, o los rechazan para que se sometan a nueva revisión y modificación.

G. Otra información relacionada con los derechos humanos

173. Kiribati se convirtió en miembro del Commonwealth en 1979, inmediatamente después de su adhesión a las Naciones Unidas como su 139º Miembro. Kiribati también es miembro fundador del Foro de las Islas del Pacífico y miembro de varias organizaciones regionales como la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, la Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente, y la Secretaría de la Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur.

174. Kiribati respeta los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, ha ratificado los tres tratados internacionales de derechos humanos mencionados en párrafos anteriores.

175. Con respecto a las obligaciones del Gobierno en materia de presentación de informes en virtud de los tratados ratificados, la División de Derechos Humanos presta asistencia en la coordinación de esos informes.

176. Además, reconociendo los retos en materia de desarrollo, el Gobierno de Kiribati incorporó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formulación de su Plan Nacional para el período 2016-2019, vale decir, el Plan de Desarrollo de Kiribati. Todas las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han revisado y evaluado para determinar su relevancia en el contexto nacional, incluidas las condiciones iniciales del país en cada una de las esferas prioritarias principales, y se han tenido en cuenta los posibles avances en el plazo de cuatro años de aplicación del Plan. El Plan de Desarrollo de Kiribati 2016-2019 se hace eco de diversas iniciativas internacionales refrendadas por el Gobierno.

177. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento ha examinado los efectos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Las conclusiones pusieron de relieve los problemas del acceso al agua y el saneamiento, que son exacerbados por el aumento de la escasez de agua, la intrusión de agua salada, la elevación del nivel del mar y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. En el informe se señala que para la mayoría de los habitantes de Kiribati los efectos del cambio climático ya no son una amenaza sino una realidad de la vida cotidiana.

178. Kiribati se convirtió en miembro y parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1995, después de ratificar la Convención. También firmó y ratificó el Protocolo de Kyoto en 2000 junto con la Enmienda de Doha relativa al segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que funciona bajo la dirección de la Oficina del *Beretitenti*, interactúa con el Acuerdo de París para tener la seguridad de que se comprendan las posiciones/necesidades de modo que sea posible readaptar las prioridades de Kiribati como miembro de la región del Pacífico y como país.

179. Además, tras la aprobación del Acuerdo de París en 2015, Kiribati se convirtió en miembro en 2016 mediante la ratificación del Acuerdo. Sin embargo, con anterioridad a ello, había participado en las diversas negociaciones que condujeron a la aprobación del Acuerdo. Durante el próximo 24º período de sesiones de la Conferencia de las Partes finalizarán los trabajos relativos al Reglamento o Programa de Trabajo del Acuerdo de París tras negociaciones intensivas para asegurar que se tengan en cuenta las aportaciones y posiciones de todos los países. Por lo tanto, se trata de una actividad en curso.

Capítulo 3

Información sobre no discriminación e igualdad y recursos efectivos

A. Igualdad y no discriminación

180. La legislación nacional de Kiribati, es decir, la Constitución, que es la ley suprema, hace hincapié en la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La Constitución no estipula de manera directa la igualdad de todas las personas ante la ley. Es preciso comprender el principio jurídico en virtud del cual todos los ciudadanos de Kiribati tienen los derechos estipulados en el capítulo 2 de la Constitución. La igualdad se desprende evidentemente de la palabra “DERECHOS”, en el sentido de que todos los ciudadanos son iguales. La legislación nacional rige para todos.

181. En el párrafo 3 del artículo 15 de la Constitución se describe la discriminación y su aplicación para garantizar la prohibición de toda discriminación injusta en Kiribati. Se

estipula claramente que los ciudadanos deben comprender su derecho a ser tratados en pie de igualdad y a no ser discriminados de manera directa o indirecta.

182. Cabe señalar, por ejemplo, que ha sido necesario adoptar medidas para impedir la discriminación en todo momento. Las creencias culturales de Kiribati se oponen a la promoción de la igualdad ya que prevalece el “predominio de la autoridad del hombre”. Por ejemplo, la violencia contra la mujer se percibe como una forma de disciplina aceptable o incluso merecida para las mujeres que no cumplen las funciones de género que se les atribuyen. La cultura, y en especial la referencia a Kiribati como sociedad patriarcal, se citan frecuentemente como obstáculos para alcanzar el empoderamiento de la mujer.

183. Kiribati dio un importante paso hacia la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la legislación local mediante la promulgación de la Ley de Bienestar de la Infancia, la Juventud y la Familia de 2013. Según un informe del UNICEF, esa emblemática Ley proporciona una base jurídica para un sistema integral de protección de la infancia en Kiribati mediante el establecimiento de estructuras, procesos y sistemas a través de los cuales se puede llevar a cabo la protección. Además, la recientemente promulgada Ley de Educación prohíbe el castigo corporal en todas las escuelas, y complementa la legislación mencionada en lo que respecta a reforzar la protección de la infancia.

184. Kiribati ha adoptado importantes medidas para mejorar los derechos de la mujer y eliminar la discriminación contra ella. La emblemática Ley *Te Rau n Te Mwenga* de 2014 tiene por objeto poner fin a la violencia doméstica y responder a quienes intentan abolir esos derechos. La Ley prevé la seguridad y la protección de todas las personas, el apoyo y la reparación para todas las víctimas, y un programa para las víctimas de la violencia doméstica.

185. En relación con el bienestar de las personas con discapacidad, el Gobierno de Kiribati ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2013 y está elaborando una política nacional sobre la discapacidad que ofrece un marco de orientación a todas las partes interesadas y a todas las comunidades para mejorar la vida de las personas con discapacidad, eliminar los obstáculos en la sociedad, y concienciar sobre los derechos y las necesidades relacionados con la discapacidad. Kiribati está aplicando su política de inclusión de las personas con discapacidad, entre otras cosas mediante la mejora del acceso a servicios específicos para las personas con discapacidad y de la calidad de los mismos. Se ha asignado al programa una financiación total por valor de 4,4 millones de dólares, que comprende cinco esferas de resultados:

- Coordinación, dirección y supervisión de las políticas y programas del Gobierno a cargo del Ministerio de la Mujer, Juventud, Deporte y Asuntos Sociales, y cumplimiento cada vez mayor de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativas a los servicios para personas con discapacidad.
- Fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad y mayor concienciación de la comunidad y del apoyo al derecho de acceso de las mujeres, hombres, niños y niñas con discapacidad a los servicios.
- Mayor acceso a la infraestructura pública.
- Aumento del número y mejora de la calidad de los servicios de educación inclusiva para personas con discapacidad.
- Aumento del número y mejora de la calidad de los servicios específicos de salud y rehabilitación y de las tecnologías de apoyo.

Referencias

- Births, Deaths, Marriages Registration Ordinance (Cap 5)*. (1977). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/consol_act/bdamro436/bdamro436.html?stem=&synonyms=&query=birth.
- Children, Young People and Family Welfare Act*. (2013). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/cypafwa2013365/cypafwa2013365.html?stem=&synonyms=&query=welfare%20act.
- Communication Act*. (2013). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/ca2013176/index.html?stem=&synonyms=&query=communication%20act.
- Communications Act*. (2013). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/ca2013176/index.html?stem=&synonyms=&query=communication%20act.
- Early Childhood Care and Educaiton Act 2017*. (2017). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/eccaea2017268/eccaea2017268.html?stem=&synonyms=&query=early%20childhood.
- Education Act 2013*. (2013). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/ea2013104/ea2013104.html?stem=&synonyms=&query=education.
- Ley de Justicia Juvenil*. (2015). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/jja2015191/jja2015191.html?stem=&synonyms=&query=Juvenile.
- Marriage Ordinance (Cap 54)*. (1977). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/consol_act/mo138/mo138.html?stem=&synonyms=&query=marriage.
- Native Lands Ordinance (Cap 61)*. (1977). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/consol_act/nlo184/nlo184.html?stem=&synonyms=&query=native%20land.
- Código Penal (Cap 67)*. (1977). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/consol_act/pc66/pc66.html?stem=&synonyms=&query=penal%20code.
- Prisons Ordinance (Cap 76)*. (1977). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/consol_act/po177/po177.html?stem=&synonyms=&query=prison%20ordinance.
- Te Rau N Te Mwenga Act 2014*. (2014). Retrieved from Pacific Islands Legal Information Institute: http://www.pacii.org/cgi-bin/sinodisp/ki/legis/num_act/trntma2014174/trntma2014174.html?stem=&synonyms=&query=family%20peace.
- Treaty bodies Treaties. (n.d.). Retrieved from UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=91&Lang=EN.